



Asamblea General

Distr. general
9 de febrero de 2024
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

55º período de sesiones

26 de febrero a 5 de abril de 2024

Tema 4 de la agenda

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán* **

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán

Resumen

En el presente informe, presentado de conformidad con la resolución 52/27 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, Javaid Rehman, expone un panorama de las preocupaciones actuales en materia de derechos humanos en la República Islámica del Irán. En él, el Relator Especial se refiere a las tendencias observadas, las inquietudes existentes y los progresos realizados en la protección de los derechos humanos, e incluye recomendaciones para mejorar la situación a ese respecto.

* Se acordó publicar este documento tras la fecha prevista debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta.

** El anexo del presente informe se distribuye tal como se recibió, únicamente en la lengua en que se presentó y sin revisión editorial.



I. Introducción

1. El presente informe presentado en cumplimiento de la resolución 52/27 del Consejo de Derechos Humanos, es el informe final que presenta al Consejo el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, Javaid Rehman. El informe, que contiene información recopilada hasta el 31 de diciembre de 2023, se divide en cinco secciones. Tras la introducción, la segunda sección presenta las principales cuestiones y preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán durante el período que abarca el informe. En la tercera sección, el Relator Especial presenta su evaluación general de la aplicación de las principales recomendaciones que ha formulado durante su mandato de seis años. En la cuarta sección, examina brevemente el impacto de las sanciones económicas. La sección final contiene las conclusiones y recomendaciones más importantes del Relator Especial. Se adjunta al informe una lista completa de las recomendaciones formuladas durante su mandato de seis años.
2. En el período a que se refiere el informe se produjeron continuas y considerables violaciones de los derechos humanos orquestadas por el Estado tras las protestas nacionales de septiembre de 2022. Las autoridades iraníes siguen reprimiendo a los defensores de los derechos humanos y seleccionándolos para las detenciones, instituyendo políticas administrativas draconianas y presentando nuevos proyectos de ley para reprimir aún más a las niñas y las mujeres. Los principales acontecimientos y actividades durante el período reflejan las respuestas globales del Relator Especial al movimiento “Mujeres, Vida, Libertad” y sus actividades conexas e interacciones con él.
3. Desde la aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de la resolución S-35/1, en la que el Consejo decidió establecer una misión internacional independiente de investigación sobre la República Islámica del Irán, con el mandato de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con las protestas que habían tenido lugar desde el 16 de septiembre de 2022, especialmente con respecto a las mujeres y los niños, el Relator Especial ha mantenido reuniones pormenorizadas con los miembros de la misión. Se reunió con los miembros de la misión y su personal en Ginebra durante los meses de abril y junio de 2023 y ha seguido cooperando con la misión, entre otras formas compartiendo información pertinente y celebrando reuniones virtuales.
4. Durante el período sobre el que se informa, el Relator Especial visitó varios países y mantuvo reuniones con las partes interesadas pertinentes, incluidas víctimas de violaciones de los derechos humanos, sus familiares y amigos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En 2023, se reunió con víctimas y sus familiares durante sus visitas a Francia (abril), los Países Bajos (junio), Noruega (septiembre) y Suecia (septiembre, noviembre y diciembre) y participó en conferencias y otros actos. Presentó su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra durante el mes de marzo de 2023¹ y también hizo exposiciones y celebró reuniones con diversas partes interesadas en Suiza en abril, junio y septiembre de 2023.
5. El Relator Especial visitó los Estados Unidos de América y el Canadá entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre de 2023 y presentó su sexto y último informe a la Asamblea General el 24 de octubre de 2023². También se entrevistó con diversas partes interesadas, entre ellas víctimas y sus familiares, así como representantes de la sociedad civil y funcionarios de los Estados Unidos y el Canadá. En el Canadá, el Relator Especial también celebró una reunión pormenorizada con las familias de las víctimas del vuelo 752 de Ukraine International Airlines³. Del 18 al 26 de noviembre de 2023, el Relator Especial visitó Australia, donde se reunió con víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por la República Islámica del Irán y con sus familias, y se entrevistó con diversos interlocutores, incluidos miembros de organizaciones de la sociedad civil. El Relator Especial

¹ A/HRC/52/67.

² A/78/326.

³ Véase <https://www.ps752justice.com/>.

también mantuvo conversaciones muy constructivas y útiles con funcionarios del Gobierno australiano.

6. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, el Relator Especial, conjuntamente con otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales, transmitió 24 comunicaciones al Gobierno de la República Islámica del Irán. Durante el mismo período, el Gobierno de la República Islámica del Irán envió 13 respuestas a comunicaciones. El Relator Especial, conjuntamente con otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales, también formuló 11 declaraciones públicas.

7. El Relator Especial lamenta que el Gobierno de la República Islámica del Irán le haya denegado la entrada en el país, pero agradece, no obstante, a los funcionarios competentes su limitada colaboración con su mandato. Da las gracias a todas las personas y organizaciones que han contribuido a la realización del presente informe con sus aportaciones y testimonios.

II. Panorama de la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán

A. Pena de muerte

8. El Relator Especial sigue profundamente preocupado por el repunte observado de las condenas a pena de muerte y las ejecuciones durante el período que abarca el informe. Según la información recibida, se calcula que en 2023⁴ se ejecutó a 834 personas, lo que supone un aumento del 43 % en comparación con 2022, año en el que se ejecutó a, por lo menos, 582 personas⁵. De las ejecuciones de las que se informó en 2023, al menos 471 (el 56,5 %) lo fueron por cargos relacionados con drogas⁶, lo que supone un aumento considerable en comparación con 2022, cuando 256 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas⁷. Según se ha informado, en 2023 también se llevaron a cabo siete ejecuciones públicas⁸.

9. El Relator Especial está sumamente preocupado por el hecho de que se hayan dictado condenas a pena de muerte fundamentadas en actuaciones que violaron las debidas garantías procesales y el derecho a un juicio imparcial, previstos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Islámica del Irán es parte. Los ejecutados fueron torturados y maltratados, y con frecuencia se les denegó el acceso a un abogado, y a los abogados no se les permitió defender a sus clientes. El número de personas ejecutadas procedentes de minorías étnicas y religiosas sigue siendo desproporcionadamente alto, en especial por delitos relacionados con las drogas o la seguridad⁹. Aunque solo constituyen entre el 2 % y el 5 % de la población del país, al menos el 20 % de los ejecutados en 2023 eran baluchis (170)¹⁰, y un número considerable de ellos fueron ejecutados por delitos relacionados con las drogas.

10. El Relator Especial lamenta que en el sistema de justicia penal iraní se pueda imponer la pena de muerte por más de 80 delitos, entre ellos infracciones penales contra la seguridad nacional formuladas en términos generales y vagos como las de *moharebeh* (tomar las armas para atentar contra las vidas o los bienes de los ciudadanos y para infundir temor a la población), *efsad-e fel-arz* (sedición contra el poder constituido), *baghy* (rebelión armada) y otros delitos como los relacionados con las drogas, el adulterio, la homosexualidad, la apostasía, la blasfemia, el hurto y el consumo de alcohol (para la cuarta condena), así como

⁴ Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

⁵ Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty (ECPM), “Annual report on the death penalty in Iran 2022”.

⁶ Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

⁷ Iran Human Rights y ECPM, “Annual report on the death penalty in Iran 2022”.

⁸ Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

⁹ Véase, por ejemplo, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/iran-public-execution-of-majidreza-rahnavaard-exposes-authorities-revenge-killings/>.

¹⁰ Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

el fraude, los delitos económicos, la prostitución y algunas formas de trata de personas¹¹. La mayoría de estos delitos no alcanzan el umbral de “delitos más graves” y, por lo tanto, la aplicación de la ley a su respecto contraviene el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

11. Durante 2023, al menos 39 personas fueron ejecutadas tras ser condenadas como consecuencia de acusaciones de haber cometido los delitos de *moharebeh*, *efsad-e fel-arz* y *baghy* relacionados con la seguridad nacional¹². En mayo de 2023, las autoridades ejecutaron a dos hombres por apostasía únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión a través de actividades en medios sociales¹³, y a una persona por cargos de adulterio¹⁴.

Ejecuciones en relación con las protestas

12. A 31 de diciembre de 2023, desde el inicio de las protestas a escala nacional en septiembre de 2022, las autoridades iraníes han ejecutado, lamentablemente, al menos a ocho manifestantes.

13. El 23 de noviembre de 2023, Milad Zohrevand, un joven de 20 años, fue ejecutado en secreto sin previo aviso a su familia. Las autoridades lo habían detenido a raíz de una protesta en Malayer, provincia de Hamedan, y posteriormente lo acusaron de matar a un agente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica el 26 de octubre de 2022, durante las protestas que tuvieron lugar en todo el país¹⁵.

14. El Relator Especial sigue sumamente preocupado por el hecho de que, al igual que en anteriores ejecuciones relacionadas con las protestas de septiembre de 2022, en la causa del Sr. Zohrevand se contraviene el derecho a un juicio imparcial previsto en el derecho internacional de los derechos humanos y en las debidas garantías procesales. También hay informes preocupantes de que los padres del Sr. Zohrevand fueron detenidos tras su ejecución, algo que también ocurrió a las familias de algunas de las otras personas ejecutadas en 2023. Al Relator Especial le preocupa profundamente que por lo menos otras 5 personas hayan sido condenadas a pena de muerte en relación con las protestas a escala nacional, mientras que al menos otras 15 corren el riesgo de ser condenadas a pena de muerte¹⁶.

Ejecución de jóvenes infractores

15. Según el derecho penal iraní, las niñas de hasta 9 años lunares y los niños de hasta 15 años lunares pueden ser condenados a muerte por delitos *qisas* (a los que se aplica la ley del talión), como el asesinato, o delitos *hudud* (para los que las penas son obligatorias y fijas), como el adulterio¹⁷. El Relator Especial sigue alarmado por las condenas a pena de muerte de niños y lamenta que no se hayan observado progresos en la aplicación de las recomendaciones formuladas por él y sus predecesores, otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales y mecanismos internacionales de derechos humanos de que se aboliera la pena de muerte para los niños, independientemente de las circunstancias y la naturaleza del delito cometido.

¹¹ A/76/160, julio de 2021, párr. 49.

¹² Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

¹³ Amnistía Internacional, @AmnestyIran, 8 de mayo de 2023, disponible en <https://twitter.com/AmnestyIran/status/1655569792391061507?lang=en-GB>.

¹⁴ Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

¹⁵ Véanse <https://www.en-hrana.org/milad-zohrevand-executed-in-hamedan-prison-ten-days-after-supreme-court-confirmation/?hilite=Milad> y <https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-67512588>. Véanse también A/HRC/52/67 y A/78/326 para más detalles sobre las protestas ejecutadas anteriormente. <https://www.en-hrana.org/milad-zohrevand-executed-in-hamedan-prison-ten-days-after-supreme-court-confirmation/?hilite=Milad>.

¹⁶ Véase <https://www.amnesty.org/en/documents/mde/13/7552/2023/en/>.

¹⁷ A/75/213, párr. 31.

16. Al menos un joven infractor, Hamidreza Azari, de 17 años, que presuntamente cometió un asesinato cuando tenía 16 años y 8 meses, fue ejecutado el 24 de noviembre de 2023¹⁸.

Ejecución de mujeres

17. El Relator Especial lamenta constatar que la República Islámica del Irán es uno de los principales verdugos de mujeres, dado que en 2022 ejecutó a 16 de las 24 mujeres que fueron ejecutadas en todo el mundo ese año¹⁹. Según se ha informado, durante 2023, al menos 22 mujeres fueron ejecutadas. Muchas mujeres condenadas por *qisas* son a su vez víctimas de violencia doméstica o matrimonio infantil. El Relator Especial insta a que se reforme urgentemente la legislación iraní para abolir las condenas obligatorias que no tienen en cuenta las circunstancias individuales, y para reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia y la discriminación.

B. Detenciones y privación de libertad arbitrarias y violaciones del derecho a un juicio imparcial

18. Preocupan al Relator Especial los informes sobre continuas detenciones arbitrarias y el uso frecuente de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como patadas, azotes y golpes con porras y cables, reclusión prolongada en régimen de aislamiento, denegación deliberada de atención médica, descargas eléctricas y simulacros de ejecución. Además, los métodos de tortura psicológica denunciados por las víctimas incluyen insultos degradantes y blasfemias, amenazas de muerte y violación, y amenazas de hacer daño a los familiares de los detenidos²⁰.

19. El uso de la tortura se daba especialmente en el caso de personas acusadas o condenadas por delitos contra la seguridad nacional, delitos políticos o delitos relacionados con las drogas. El 20 de diciembre de 2022, Mojahed (Abbas) Kourkouri fue detenido cerca de Ghalehtol, provincia de Juzestán, presuntamente por agentes del Ministerio de Inteligencia y Seguridad, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el Mando de las Fuerzas del Orden de la República Islámica del Irán (conocido como Faraja). El Sr. Kourkouri ha permanecido recluido en régimen de aislamiento durante períodos prolongados en la prisión de Sheiban, provincia de Juzestán, y ha sido sometido en repetidas ocasiones a tortura y otros malos tratos, incluidas fuertes palizas²¹. El 24 de diciembre de 2023, la Sala 39 del Tribunal Supremo confirmó la condena y la pena de muerte del Sr. Kourkouri, y el envío de la orden de imposición de la pena a la oficina de ejecución de penas hace temer que su ejecución sea inminente²².

20. El 1 de febrero de 2023, Mahmoud Mehrabi fue detenido y acusado de “sedición contra el poder constituido” (*efsad-e fel-arz*) tras participar en el movimiento de protesta a escala nacional. A pesar de haber sido torturado y maltratado, a consecuencia de lo cual desarrolló una hernia, el Sr. Mehrabi fue mantenido en régimen de aislamiento durante 20 días y se le denegó tratamiento médico²³.

21. El Relator Especial señala que las autoridades no han investigado de manera satisfactoria numerosas denuncias de tortura de detenidos. A este respecto, las autoridades afirman que las confesiones obtenidas bajo coacción o tortura están prohibidas por la

¹⁸ Véase <https://iranhr.net/en/articles/6350/>.

¹⁹ Véase <https://iranhr.net/en/articles/5825/>.

²⁰ Véase Amnistía Internacional, “‘They violently raped me’. Sexual violence weaponized to crush Iran's Woman Life Freedom uprising” (diciembre de 2023) y Human Rights Watch, *World Report 2024*, pág. 310.

²¹ Para más información sobre el caso, véanse la comunicación IRN 13/2023, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28236> y <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7565/2024/en/>.

²² Véase <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7565/2024/en/>.

²³ Para más información sobre el caso, véase la comunicación IRN 11/2023, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28211>.

Constitución²⁴ y se consideran inadmisibles ante los tribunales²⁵. Sin embargo, el artículo 171 del Código Penal Islámico establece que una confesión puede ser utilizada por sí sola para fundamentar una condena, independientemente de otras pruebas practicadas²⁶.

22. Al Relator Especial también le preocupan las crecientes restricciones al acceso a un abogado defensor que el acusado elija durante la fase de instrucción. Estas restricciones son aún más preocupantes si se tiene en cuenta que, según informes reiterados, los tribunales iraníes, y en particular los tribunales revolucionarios, no suelen celebrar juicios imparciales y utilizan como prueba confesiones obtenidas bajo tortura. Por ejemplo, el rapero iraní Toomaj Salehi fue detenido violentamente por primera vez el 30 de octubre de 2022 y permanece recluido por apoyar las protestas pacíficas y alzar su voz con canciones de protesta. Al parecer, fue torturado o sometido a otros malos tratos durante su detención para obligarlo a hacer “confesiones”. Cuando, según informaciones recibidas, apareció en la televisión estatal, Toomaj Salehi tenía los ojos vendados y podían observarse hematomas en su rostro, uno de ellos en su ojo izquierdo que estaba gravemente dañado. Además, el tobillo derecho estaba fracturado, a consecuencia de presuntas torturas y malos tratos físicos, y es posible que necesite cirugía²⁷.

Ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad

23. El Relator Especial acoge con satisfacción la liberación por parte de las autoridades iraníes de al menos ocho personas durante 2023, entre ellas Olivier Vandecasteele, trabajador belga de ayuda humanitaria, y dos ciudadanos austriaco-iraníes, Massud Mossaheb y Kamran Ghaderi, en mayo y junio de 2023²⁸.

24. En septiembre de 2023, se produjo un canje de prisioneros entre los Estados Unidos y la República Islámica del Irán. Se permitió salir de la República Islámica del Irán a cinco ciudadanos irano-estadounidenses. A cambio, los Estados Unidos aceptaron liberar a cinco ciudadanos iraníes detenidos; de las cinco personas liberadas, tres decidieron no regresar a la República Islámica del Irán²⁹.

25. A pesar de la liberación y el intercambio de presos, el Relator Especial sigue profundamente preocupado por el trato dispensado a los ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad. Esto incluye las ejecuciones de al menos dos personas con doble nacionalidad³⁰, la condena a cinco años de prisión de un ciudadano francés³¹, y el riesgo de ejecución inminente de dos ciudadanos con doble nacionalidad, un germano-iraní, Jamshid Sharmahd, y un sueco-iraní, Ahmedreza Djalali.

26. Ahmedreza Djalali lleva detenido arbitrariamente desde abril de 2016³² y se enfrenta a un riesgo inminente grave y sustancial de ejecución como represalia, ya que se ha informado de que un funcionario del poder judicial lo visitó en prisión el 22 de diciembre de 2023, advirtiéndole de que su condena y pena de muerte estaban “confirmadas” y “pronto se ejecutarían”³³.

27. Preocupa al Relator Especial la pauta de detención arbitraria de extranjeros y personas con doble nacionalidad y su utilización para obtener ventaja y canjear prisioneros. Insta a las autoridades iraníes a que se abstengan de vulnerar el derecho internacional tomando como

²⁴ Art. 38.

²⁵ Código Penal Islámico, arts. 168 y 169.

²⁶ Véase también el Código de Procedimiento Penal, art. 194, disponible en <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1991/en/115464>.

²⁷ Véanse las comunicaciones IRN 26/2022 e IRN 6/2023. Pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results>.

²⁸ A/78/326, párr. 26.

²⁹ Véase <https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-66850811>.

³⁰ A/78/326, párr. 25.

³¹ Véase la comunicación IRN 19/2023, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28610>.

³² Véase A/HRC/WGAD/2017/92.

³³ Véase <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/12/iran-arbitrarily-detained-swedish-iranian-academic-ahmadreza-djalali-at-grave-risk-of-retaliatory-execution/>.

rehenes a ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, y pide una revisión inmediata de todos los casos y la liberación de todas las personas detenidas arbitraria e injustamente.

C. Derechos a la libertad de opinión y de expresión, y a la libertad de reunión y de asociación pacíficas

28. Se han impuesto cada vez más limitaciones al derecho a la libertad de opinión y de expresión, que afectan a diversos grupos, como periodistas, artistas, defensores de los derechos humanos, trabajadores, docentes, estudiantes, grupos minoritarios y mujeres. En su clasificación de 2023 de la libertad de prensa, Reporteros sin Fronteras sitúa a la República Islámica del Irán en el puesto 177 de 180 países³⁴.

29. Se ha denunciado un creciente número de agresiones contra personas, entre ellas periodistas que han expresado su opinión sobre cuestiones de derechos humanos, incluido el uso obligatorio del hiyab.

30. Tres mujeres periodistas, Mehrnoosh Zarei Hanzaki, Saeideh Shafiei y Nasim Sultan Beigi, fueron juzgadas y las dos últimas condenadas por la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán el 31 de julio, acusadas de “reunión y confabulación” y “propaganda contra la República Islámica”, entre otros cargos, por “abogar públicamente por el velo facultativo” y “oponerse al hiyab obligatorio”. Los juicios vulneraron el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales³⁵.

31. El 22 de octubre de 2023, un tribunal revolucionario condenó a dos periodistas, Niloofar Hamedi y Elaheh Mohammadi, a penas de 13 y 12 años de cárcel, respectivamente, tras un juicio a puerta cerrada. Ambos fueron condenados en relación con sus reportajes sobre la muerte de Jina Mahsa Amini en septiembre de 2022³⁶.

32. Las autoridades han censurado todos los medios de comunicación y bloquean los canales extranjeros de televisión por satélite. Las plataformas de medios sociales, como WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, Signal y YouTube, siguen bloqueadas³⁷.

33. En septiembre de 2023 seguía pendiente el proyecto de ley sobre un sistema regulador de los servicios del ciberespacio, antes conocido como proyecto de ley de protección de los usuarios de Internet³⁸, que introduciría cambios alarmantes en los controles de Internet, intensificaría la vigilancia y penalizaría la producción y distribución de herramientas para eludir la censura.

34. El 15 de marzo de 2023, Sepideh Gholian fue detenida de nuevo por la fuerza en Arak, provincia de Markazi, cuando se dirigía a Dezful, provincia de Juzestán, con su familia. La Sra. Gholian es una defensora de los derechos humanos y periodista independiente, que se centra principalmente en los derechos laborales y trabaja en estrecha colaboración con el sindicato de trabajadores de la Haft Tappeh Cane Sugar Company, creada en 1974. La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a la Sra. Gholian el 6 de mayo de 2023 a dos años de prisión, le prohibió unirse a grupos políticos o sociales y restringió el uso de su

³⁴ Véase <https://rsf.org/en/country/iran>.

³⁵ Véanse <https://www.womeninjournalism.org/threats-all/iran-two-women-journalists-sentenced-to-over-four-years-in-prison-for-reporting>; y <https://www.en-hrana.org/three-female-journalists-summoned-to-present-final-defense/?hilite=three+female+journalists>.

³⁶ Véase <https://rsf.org/en/12-and-13-year-jail-terms-journalists-elaheh-mohammadi-and-niloofar-hamedi-rsf-denounces-abusive>.

³⁷ Véanse Article 19, “Tightening the net: Iran one year on from the Mahsa Jhina Amini uprising”, 15 de septiembre de 2023, y <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2023/10/ARTICLE-19-FCDO-Iran-submission-2023.pdf>.

³⁸ Véanse Article 19, “Tightening net: Iran one year on from the Mahsa Jhina Amini uprising” y <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-human-rights-experts-urge-iran-abandon-restrictive-internet-bill>.

teléfono móvil, además de prohibirle durante dos años la entrada a Teherán y las provincias adyacentes. Los cargos contra ella incluían “insultar al Líder Supremo”³⁹.

35. En 2023 se produjeron al menos 1.266 protestas sindicales, 4 casos de represión de protestas y 32 huelgas sindicales⁴⁰. Esas protestas estaban relacionadas principalmente con reivindicaciones salariales, malas condiciones económicas y gestión ineficaz de las instituciones gubernamentales, lo que había provocado el descontento de los trabajadores de distintos sectores⁴¹.

D. Situación de las mujeres y las niñas

1. Legislación y políticas sobre el velo obligatorio

36. El Relator Especial sigue alarmado por la continua represión de los derechos de las mujeres y las niñas, y señala que, desde abril de 2023, las autoridades han recurrido cada vez más a métodos policiales brutales y represivos contra las niñas y las mujeres que desafían las leyes sobre el hiyab obligatorio. Se enviaron más de un millón de mensajes SMS a mujeres amenazándolas con que les confiscarían sus vehículos si las descubrían viajando sin velo, y se ejecutaron miles de esas órdenes amenazadoras⁴². Las autoridades estatales han cerrado por la fuerza cientos de negocios por no hacer cumplir el uso obligatorio del velo, y a innumerables mujeres se les ha denegado el acceso a la educación, el transporte público y los servicios bancarios⁴³.

37. Se ha asignado a la policía de la moral la nueva función de “interpelar y notificar a quienes no acaten el uso obligatorio del velo”, y las autoridades han subrayado que quienes se nieguen a cumplir las leyes del uso obligatorio del velo serán remitidos a las autoridades judiciales⁴⁴.

38. El Relator Especial ha recibido varios informes y ha examinado videos compartidos en los medios sociales que muestran a varias mujeres interpelladas, detenidas y trasladadas por la fuerza a furgonetas señalizadas tras el redespiegue de la policía de la moral⁴⁵. El Relator Especial lamenta la muerte de otra mujer que no llevaba velo, Armita Geravand, de 16 años, que se desplomó en un vagón del metro de Teherán el 1 de octubre de 2023, según informaciones recibidas como consecuencia de un altercado por no llevar hiyab⁴⁶. Ingresó en un hospital de la fuerza aérea⁴⁷, permaneció en coma durante más de tres semanas, y se declaró oficialmente su muerte el 28 de octubre de 2023⁴⁸.

39. Como señala el Relator Especial en su último informe a la Asamblea General, le preocupa seriamente el proyecto de ley de apoyo a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab, que amplifica la segregación de género e impone medidas más estrictas contra el “porte inadecuado del velo”. El artículo 47 del proyecto de ley define la “vestimenta inapropiada” para mujeres y hombres como “llevar ropa que atente contra la

³⁹ Véase la comunicación IRN 14/2023, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28287>.

⁴⁰ Véase <https://www.en-hrana.org/annual-analytical-and-statistical-report-on-human-rights-in-iran-for-the-year-2023/#A10>.

⁴¹ Véase Human Rights Activists, *Annual Statistical Report of Human Rights Conditions in Iran 2023* (2024).

⁴² Amnistía Internacional, “Iran: authorities doubling down on punishments against women and girls defying discriminatory veiling laws”, 26 de julio de 2023.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Véase <https://www.bbc.com/persian/world-66172691>.

⁴⁵ Véase, por ejemplo, <https://twitter.com/yazdanparast313/status/1680198112206307328?s=20?>, 15 de julio de 2023 (en persa).

⁴⁶ Véase, por ejemplo, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/iran-un-experts-shocked-new-wave-attacks-girls-and-women>.

⁴⁷ Véanse <https://www.nbcnews.com/news/world/iranian-girl-armita-geravand-hospitalized-morality-police-rcna118787>; Hengaw Organization for Human Rights, @HengawO, 3 de octubre de 2023, disponible en <https://twitter.com/HengawO/status/1709290245487751323> (en persa).

⁴⁸ Véase Reuters, “Iranian teenager Armita Geravand dies after alleged confrontation, IRNA reports”, 28 de octubre de 2023.

decencia pública, como ropa reveladora o ajustada o ropa que deje ver una parte del cuerpo más baja que el cuello o más alta que el tobillo o más alta que el antebrazo”⁴⁹.

40. Los artículos 38 a 70 del proyecto de ley definen severos castigos para mujeres y niñas, que incluyen multas, penas de prisión, prohibición de viajar, confiscación de pasaportes y propiedades, y privación de derechos sociales. El proyecto de ley también establece diferentes niveles o grados de castigo, que van de 3 meses a 10 años de prisión y multas de más de mil millones de riales, dependiendo de la infracción⁵⁰.

41. Al Relator Especial también le preocupa el uso de tecnología de vigilancia previsto para la aplicación del proyecto de ley (arts. 28 y 62). El 13 de agosto de 2023, el Parlamento votó a favor de invocar el artículo 85 de la Constitución, lo que permite a una comisión parlamentaria revisar el proyecto sin debate público. El 20 de septiembre de 2023, el Parlamento aprobó una versión modificada del proyecto de ley, que consta de 71 artículos, y acordó un período de tres años de aplicación experimental del proyecto una vez aprobado por el Consejo de Guardianes y antes de su ratificación con arreglo a la Constitución⁵¹.

42. El 24 de octubre de 2023, el portavoz del Consejo de Guardianes reveló que el Consejo había revisado el proyecto de ley. Sin embargo, varias cuestiones necesitaban más aclaraciones, por lo que había decidido devolver el proyecto de ley al Parlamento para que siguiera estudiándolo⁵². El Consejo de Guardianes señaló que varios términos utilizados en el proyecto de ley eran vagos e imprecisos, como el de “indecencia”, al igual que los comportamientos que ese término podría designar, que no estaban definidos en el proyecto de ley ni en ningún otro texto legislativo. El Consejo de Guardianes también destacó otros elementos que necesitaban aclaración, como el modo en que las disposiciones del proyecto de ley interactuarían con la autoridad del Consejo Supremo de la Revolución Cultural, órgano que también tiene el mandato de supervisar la aplicación por parte de los organismos públicos de los principios del hiyab y la castidad.

43. El Relator Especial, conjuntamente con otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales, ha expresado su grave preocupación por el proyecto de ley, que “podría describirse como una forma de *apartheid* de género, ya que las autoridades parecen estar gobernando mediante una discriminación sistémica con la intención de reprimir a las mujeres y las niñas hasta la sumisión total”⁵³. Las nuevas medidas impuestas por el Gobierno son discriminatorias y suponen un acontecimiento peligroso para los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas a participar en la vida pública y a recibir un trato digno por ejercer sus derechos fundamentales.

2. Violación y violencia sexual

44. El Relator Especial ha recibido informes extremadamente preocupantes de que se utilizaron la violación, la tortura y otras formas de violencia sexual como arma para infligir castigos a manifestantes pacíficos durante las protestas de 2022. En un informe publicado en diciembre de 2023, Amnistía Internacional documentó un amplio patrón de uso de la violencia sexual, incluida la violación, como arma bárbara y represiva para reprimir toda forma de disidencia⁵⁴.

45. El informe de Amnistía Internacional proporciona detalles estremecedores sobre 45 supervivientes, entre ellos 12 mujeres, 26 hombres y 7 niños, y revela gráficamente cómo fueron sometidos a violación, y en algunos casos a violación en grupo, u otras formas de violencia sexual por agentes de seguridad e inteligencia tras su detención arbitraria⁵⁵. La

⁴⁹ Véanse <https://atrdae.medium.com/a-war-against-woman-life-freedom-the-complete-translation-of-i-r-s-new-hijab-law-35f68bf55757>; y analysis by Impact Iran, an overview of the “chastity and hijab bill”, 26 de septiembre de 2023.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Véase <https://www.ekhtebare.ir/کمیسی-مصوبه-حجاب-و-عفاف-لایحه-نهایی-متن/> (en persa).

⁵² Véase <https://www.isna.ir/news/1402080201201/> (en persa).

⁵³ Véase <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/irans-proposed-hijab-law-could-amount-gender-apartheid-un-experts>.

⁵⁴ Véase Amnistía Internacional, “‘They violently raped me’. Sexual violence weaponized to crush Iran’s Woman Life Freedom uprising”.

⁵⁵ *Ibid.*, pág. 11.

conclusión del informe de que “los agentes del Estado utilizaron la violencia sexual con total impunidad como arma de tortura para aplastar el espíritu, la autoestima y el sentido de dignidad de los manifestantes, para disuadirlos de seguir protestando y para castigarlos por desafiar a la clase política y de seguridad y su arraigado sistema de discriminación de género, aplicado a través de una legislación draconiana, incluidas las abusivas leyes del velo obligatorio”⁵⁶ es alarmante y confirma trágicamente la postura del Relator Especial sobre la cultura de impunidad imperante y la ausencia de rendición de cuentas a nivel nacional.

46. Es importante señalar que las autoridades iraníes no han investigado, acusado ni enjuiciado a ningún funcionario por las violaciones y otros actos de violencia sexual en el contexto del movimiento “Mujeres, Vida, Libertad” documentados por Amnistía Internacional⁵⁷.

E. Situación de los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos y los abogados

47. La detención y reclusión de defensores de los derechos humanos y abogados es extremadamente inquietante. El 29 de octubre de 2023, la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, junto con otros dolientes, manifestantes y activistas, fue detenida cuando asistía al funeral de la Sra. Geravand en el cementerio de Behesht-e-Zahra, provincia de Teherán⁵⁸. Según los informes, la “golpearon fuertemente” en la cabeza y la cara, y le rompieron las gafas⁵⁹, y la acusaron de “contravenir las normas del hiyab” y de “actuar contra la seguridad psicológica de la sociedad”⁶⁰. La Sra. Sotoudeh fue enviada a la prisión de Qarchak, donde inició una huelga de hambre y, según informes, se negó a tomar su medicación hasta que fuera liberada. El 15 de noviembre de 2023 fue puesta en libertad bajo fianza⁶¹.

48. Tres abogados, Nazanin Salari, Mahmoud Taravtrouy y Masoud Ahmadian, se enfrentan actualmente a juicio acusados de “cooperación con países “hostiles”, “reunión y confabulación para actuar contra la seguridad nacional” y “propaganda contra la República Islámica del Irán”. Nazanin Salari y Mahmoud Taravtrouy fueron detenidos en el contexto de las protestas nacionales de 2022⁶².

49. El Relator Especial considera alarmantes los informes que ha recibido sobre el estado de salud de numerosos defensores de los derechos humanos que se encuentran encarcelados. Narges Mohammadi, destacada defensora de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, tiene importantes problemas de salud, entre ellos graves afecciones cardíacas y pulmonares, que ponen en grave peligro su salud. Según la información recibida, la Sra. Mohammadi sigue sin tener acceso a atención médica tras ser devuelta a prisión⁶³.

50. El Relator Especial también está preocupado por la salud de Nasim Soltanbeygi, defensora de los derechos humanos y periodista⁶⁴.

⁵⁶ *Ibid.*, pág. 10.

⁵⁷ *Ibid.*, pág. 82.

⁵⁸ <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/irans-proposed-hijab-law-could-amount-gender-apartheid-un-experts>. Véanse <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/30/iran-arrests-top-rights-lawyer-at-funeral-of-teenage-girl-who-died-after-metro-incident>; y <https://kurdistanhumanrights.org/en/news/2023/10/30/security-forces-arrest-at-least-15-at-armita-geravands-funeral/>.

⁵⁹ Véase <https://iranhumanrights.org/2023/10/nasrin-sotoudeh-and-activists-beaten-detained-at-funeral-of-teenager-armita-geravand/>.

⁶⁰ *Ibid.* Y véase también la comunicación IRN 20/2023, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28612>.

⁶¹ Véase <https://lawyersforlawyers.org/en/nasrin-sotoudeh-released-on-bail-after-being-arrested-at-funeral-of-armita-geravand/>.

⁶² Véase <https://lawyersforlawyers.org/en/joint-statement-three-years-after-being-charged-three-iranian-human-rights-lawyers-are-set-to-face-trial/>.

⁶³ Véase la comunicación IRN 20/2023.

⁶⁴ Véase la comunicación IRN 18/2023, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28583>.

F. Situación de las minorías

51. El Relator Especial está profundamente preocupado por la discriminación que sufren las minorías religiosas, étnicas, lingüísticas y sexuales en la República Islámica del Irán. Las personas pertenecientes a minorías son objeto de discriminación institucionalizada y, con frecuencia, de persecución sistemática. En muchos casos, miembros de minorías étnicas y religiosas han sido detenidos y reclusos arbitrariamente en relación con una serie de actividades pacíficas, como abogar por la libertad lingüística⁶⁵, organizar protestas o participar en ellas⁶⁶, o estar afiliados a partidos de la oposición; hacer campaña contra la degradación ambiental en sus zonas⁶⁷; o simplemente participar en actividades religiosas o culturales⁶⁸.

52. El Relator Especial está sumamente inquieto y conmocionado por la persecución persistente, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento de miembros de la comunidad bahaí. Según se ha informado, al menos 70 bahaíes están actualmente detenidos o cumpliendo penas de prisión, mientras que otros 1.200 se enfrentan a actuaciones judiciales o han sido condenados a duras y largas penas de prisión. Según los informes, desde octubre de 2023, agentes de seguridad han registrado y saqueado los hogares de casi 100 familias bahaíes. Según la información recibida, “las confiscaciones se han ampliado para incluir no solo libros sagrados y dispositivos electrónicos, sino también dinero en efectivo, tarjetas bancarias, joyas, títulos de propiedad, documentos de identidad, pasaportes e incluso herramientas domésticas” y “los agentes armados han intimidado aún más a los bahaíes mediante violencia física, agresiones verbales e incluso amenazas a punta de pistola”⁶⁹.

53. Las minorías étnicas y religiosas constitucionalmente reconocidas también sufren discriminación y persecución. Los árabes ahwazíes, los baluchis, los kurdos y los musulmanes suníes en general también sufren discriminación sistemática en el disfrute de sus derechos culturales y en el acceso a la función pública. Han sido objeto de detenciones arbitrarias, discriminación, persecución y victimización.

54. Las minorías étnicas y religiosas, en particular los baluchis y los kurdos, han sido objeto de privaciones arbitrarias del derecho a la vida a manos de las autoridades estatales, en especial ejecuciones y ejecuciones extrajudiciales de portadores transfronterizos, concretamente *kolbars* kurdos y *sookhtbars* baluchis.

III. Reflexión y evaluación de la situación de los derechos humanos

A. Acontecimientos positivos en materia de derechos humanos

55. Durante su mandato, el Relator Especial ha reconocido las medidas positivas y progresivas adoptadas para mejorar la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán. Una modificación de la ley sobre tráfico de drogas en noviembre de 2017 dio lugar a un descenso importante de las ejecuciones relacionadas con delitos de drogas. Como consecuencia de ella se modificaron retroactivamente las penas correspondientes a determinados delitos relacionados con drogas, que pasaron de ser de pena de muerte o

⁶⁵ Véase Ceasefire Centre for Civilian Rights, Centre for Supporters of Human Rights y Minority Rights Group International, “Rights denied: violations against ethnic and religious minorities in Iran” (marzo de 2018).

⁶⁶ *Ibid.* Véase también Human Rights Activists, *Annual Statistical Report of Human Rights Conditions in Iran 2023*.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Submission from Baha’í International Community to the Special Rapporteur, enero de 2024, pág. 22.

reclusión a perpetuidad a una pena de prisión máxima de 30 años⁷⁰. Además, también se aumentó la cantidad de droga necesaria para imponer la pena de muerte⁷¹.

56. Por lo que respecta a los derechos de la mujer, el Relator Especial toma nota de las medidas positivas que se han adoptado para mejorar los derechos de las mujeres y las niñas⁷². Por ejemplo, en 2019 las autoridades iraníes aprobaron una modificación de la ley de nacionalidad que otorga a las mujeres iraníes casadas con hombres no iraníes el derecho a solicitar la nacionalidad iraní para sus hijos menores de 18 años⁷³. El Relator Especial también reconoce el progreso desde 2019 de un proyecto de ley sobre la lucha contra la trata de personas y órganos humanos y el castigo a los contrabandistas que transportan personas a través de las fronteras iraníes⁷⁴, y el proyecto de ley de 2023 sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la promoción de su dignidad y seguridad, que tiene como objetivo criminalizar la violencia contra las mujeres⁷⁵.

57. El Relator Especial también ha reconocido los importantes avances logrados en la consecución de la igualdad de acceso a la educación para niñas y mujeres, y el progresivo aumento de la alfabetización de la mujer. Desde hace más de un decenio no ha habido prácticamente ninguna brecha de género en la matriculación en la escuela primaria y secundaria.⁷⁶ Sin embargo, como se expone más adelante, estos logros se han visto anulados, han quedado sin efecto o han tenido consecuencias negativas debido a la persistencia de un entorno general de violaciones sistemáticas y a gran escala de los derechos humanos.

B. Principales preocupaciones y reflexiones sobre la aplicación de las recomendaciones

1. Acceso, diálogo y cooperación entre las autoridades y el Relator Especial

58. El Relator Especial lamenta que, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, todavía no se le haya concedido acceso a la República Islámica del Irán. El acceso de los titulares de mandatos sobre países específicos es fundamental para su trabajo, que también incluye el diálogo y el apoyo técnico sobre, por ejemplo, la aplicación de las recomendaciones formuladas por los mecanismos de las Naciones Unidas. La denegación de acceso no solo refleja el insatisfactorio nivel de cooperación y diálogo de las autoridades iraníes, sino que también constituye una flagrante violación de la letra y el espíritu de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos por las que se establece el mandato.

2. Privación arbitraria de la vida

59. A lo largo de su mandato, el Relator Especial ha expresado su grave preocupación por la privación arbitraria de la vida en el país y está sumamente preocupado por el elevado número de condenas a pena de muerte y ejecuciones. Ha formulado al menos 35 recomendaciones a las autoridades pidiendo la abolición de la pena de muerte y la derogación de leyes incompatibles con el derecho a la vida. Como se ha señalado, el Relator Especial lamenta que las autoridades iraníes no hayan abolido la pena de muerte o restringido su aplicación a los delitos que alcanzan el umbral de “los más graves delitos” en derecho internacional, que se refieren “únicamente a los delitos de extrema gravedad de homicidio

⁷⁰ A/HRC/40/67, párr. 6. En relación con el nuevo artículo 45 de la ley de lucha contra las drogas ilícitas, véase <https://www.iranrights.org/library/document/3262>.

⁷¹ A/HRC/40/67, párr. 6.

⁷² Véase High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, *Women in the Islamic Republic of Iran* (febrero de 2023).

⁷³ A/HRC/46/50, párr. 39, y Borzou Daragahi, “Iranian mothers can now pass on citizenship to children in ‘huge win’ for campaigners”, *The Independent*, 3 de octubre de 2019. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-mothers-citizenship-children-new-law-latest-a9138206.html>.

⁷⁴ CCPR/C/IRN/CO/4, párr. 4 c).

⁷⁵ *Ibid.* párr. 4 a).

⁷⁶ A/HRC/46/50, párr. 39.

intencional⁷⁷, de conformidad con el artículo 6, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

60. El Relator Especial está alarmado por el uso de la pena de muerte para acciones cuya criminalización es contraria a las obligaciones que incumben al Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos⁷⁸; por la aplicación de la pena de muerte para delitos de seguridad nacional que no están claramente definidos⁷⁹; por el uso de la pena de muerte como un recurso de represalia de derecho privado en el caso de *qisas*, que no deja a los jueces discreción para tener en cuenta las circunstancias individuales en las que se cometió el delito⁸⁰; por la aplicación de la pena de muerte de una manera que constituye tortura y trato cruel, inhumano y degradante⁸¹, en violación del derecho del acusado a un juicio imparcial⁸²; y por su aplicación de manera discriminatoria, dirigida desproporcionadamente contra grupos étnicos y religiosos.⁸³

61. El Relator Especial también está alarmado por el preocupante aumento del número de personas ejecutadas durante su mandato. Las cifras disponibles confirman esta evolución extremadamente preocupante: en 2018, hubo al menos 253 ejecuciones⁸⁴, en 2019, 280 ejecuciones⁸⁵, en 2020, 267 ejecuciones⁸⁶, en 2021, 330 ejecuciones⁸⁷, que aumentaron a 582 ejecuciones en 2022⁸⁸ y, escandalosamente, a 834 ejecuciones en 2023⁸⁹.

3. Ejecuciones relacionadas con las drogas

62. El Relator Especial está sumamente preocupado por el aumento exponencial de las ejecuciones relacionadas con las drogas desde 2021. Las cifras de ejecuciones relacionadas con las drogas han sido: en 2018, 24⁹⁰; en 2019, 30⁹¹; en 2020, 25⁹²; en 2021, 126⁹³; en 2022, 256⁹⁴; y en 2023, 471⁹⁵. El Relator Especial reitera su preocupación por el hecho de que las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas contravienen las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo porque esas ejecuciones se aplican predominantemente a personas que viven en la pobreza y pertenecen a comunidades minoritarias vulnerables, en particular la minoría baluchi.

63. El Relator Especial está alarmado por el número desproporcionado de ejecuciones de todo tipo de miembros de comunidades minoritarias, en particular las minorías baluchi y kurda. En 2021 fueron ejecutados al menos 70 baluchis, lo que supuso el 21 % de todas las

⁷⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 35.

⁷⁸ Por ejemplo, los delitos, entre otros, de adulterio, homosexualidad y blasfemia del Código Penal Islámico. Véase [A/76/160](#), párr. 43, y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 36.

⁷⁹ Por ejemplo, delitos como *moharebeh*, *efsad-e-fel-arz* y *baghy*; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 38.

⁸⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 37.

⁸¹ Por ejemplo, el uso de ejecuciones públicas, ejecuciones por fusilamiento y el mantenimiento de la lapidación como método de ejecución en el Código Penal iraní; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 40.

⁸² Por ejemplo, el uso a gran escala de la tortura para obtener confesiones; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párrs. 41 a 45.

⁸³ Por ejemplo, las diversas comunicaciones recibidas de minorías étnicas y religiosas; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 44.

⁸⁴ [A/74/188](#), párr. 7.

⁸⁵ [A/75/213](#), párr. 29.

⁸⁶ [A/76/160](#), párr. 46.

⁸⁷ [A/77/181](#), párr. 10.

⁸⁸ [A/78/326](#), párr. 29, e Iran Human Rights y ECPM, “Annual report on the death penalty in Iran 2022”, pág. 12.

⁸⁹ Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

⁹⁰ [A/74/188](#), párr. 7.

⁹¹ [A/75/213](#), párr. 29.

⁹² [A/76/160](#), párr. 46.

⁹³ [A/77/181](#), párr. 15.

⁹⁴ [A/78/326](#), párr. 29, e Iran Human Rights y ECPM, “Annual report on the death penalty in Iran 2022”, pág. 12.

⁹⁵ Submission from Iran Human Rights to the Special Rapporteur, 15 de enero de 2024, pág. 1.

ejecuciones de ese año y el 44 % de todas las relacionadas con drogas⁹⁶. En 2022, 147 de los ejecutados pertenecían a la minoría baluchi. Se ha informado de que al menos 170 baluchis fueron ejecutados en 2023, 143 de ellos por cargos relacionados con drogas⁹⁷. En cuanto a los presos kurdos, según se ha informado, entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2021 fueron ejecutados al menos 56⁹⁸; entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2022, al menos 70⁹⁹; y entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023, al menos 181¹⁰⁰.

4. Ejecución de jóvenes infractores

64. El Relator Especial lamenta que, a pesar de las recomendaciones que han formulado él y sus predecesores, así como otros mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, las autoridades iraníes hayan seguido aplicando la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer sus delitos. En 2021, en un informe a la Asamblea General, el Relator Especial señaló que, según se había informado, en los 30 años anteriores más del 70 % de las ejecuciones de jóvenes infractores en todo el mundo habían tenido lugar en la República Islámica del Irán¹⁰¹; y en 2022 informó a la Asamblea General de que, al parecer, había al menos 84 jóvenes infractores condenados a pena de muerte en el país¹⁰². Según los informes, en 2018 hubo al menos 7 ejecuciones de jóvenes infractores¹⁰³, 4 en 2019¹⁰⁴, 4 en 2020¹⁰⁵, 2 en 2021¹⁰⁶, 3 en 2022¹⁰⁷ y al menos 1 en 2023.

65. El Relator Especial reitera sus recomendaciones anteriores y pide a las autoridades iraníes que modifiquen urgentemente la legislación para prohibir la ejecución de personas que hayan cometido un delito siendo menores de 18 años, y que ajusten plenamente el marco jurídico al derecho internacional.

5. Vulneraciones del derecho a un juicio imparcial

66. El uso de la pena de muerte es especialmente alarmante en el contexto de las violaciones generalizadas del derecho a un juicio imparcial, que convierten todas las ejecuciones en privaciones arbitrarias de la vida según el derecho internacional. En términos más generales, el Relator Especial ha recibido constantemente informes sobre el uso de la tortura y los malos tratos a personas detenidas, acusadas y condenadas. La tortura se utiliza con frecuencia como técnica para obtener confesiones. El Relator Especial señala que el artículo 38 de la Constitución prohíbe todas las formas de tortura y confesión forzada, al igual que el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, esas garantías jurídicas se violan habitualmente en la práctica. El artículo 171 del Código Penal Islámico establece que una confesión puede ser utilizada por sí sola para fundamentar una condena, independientemente de otras pruebas practicadas.

67. Dados los fuertes incentivos y la expectativa institucional de confiar en las confesiones, en particular las inducidas mediante tortura, el Relator Especial recomienda la derogación de varias disposiciones, en particular el artículo 171 del Código Penal Islámico y el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal.

⁹⁶ A/77/181, párr. 21.

⁹⁷ Submissions to the Special Rapporteur from Iran Human Rights, 15 de enero de 2024, pág. 1, y Association des Chercheurs Iraniens. Véase también Balochistan Human Rights Group, “Annual report 2023”.

⁹⁸ Véase Kurdistan Human Rights Association – Ginebra, “Interim annual report on the situation of human rights in Kurdistan of Iran for the period 1st January to October 25th 2021” (octubre de 2021).

⁹⁹ Kurdistan Human Rights Association – Ginebra, “Interim annual report on the situation of human rights in Kurdistan of Iran for the period 1st January to September 30th 2022” (octubre de 2022).

¹⁰⁰ Kurdistan Human Rights Association – Ginebra, “Interim annual report on the situation of human rights in Kurdistan of Iran for the period 1st January to 30 November, 2023”.

¹⁰¹ A/76/160, párr. 58.

¹⁰² A/77/181, párr. 25.

¹⁰³ A/74/188, párr. 10.

¹⁰⁴ A/75/231, párr. 30.

¹⁰⁵ A/76/160, párr. 59.

¹⁰⁶ A/77/181, párr. 10.

¹⁰⁷ A/HRC/52/67, párr. 63.

68. El Relator Especial también sigue preocupado por la vulneración del derecho a un juicio imparcial mediante la denegación al acusado de los servicios de un abogado o, en particular, de un abogado de su elección. Preocupa al Relator Especial que se sigan aplicando las notas a los artículos 48 y 302 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de las cuales, si se acusa a una persona de un delito punible con pena de muerte o reclusión a perpetuidad o de un “delito político o de prensa”, su elección de representación legal durante la fase de instrucción queda limitada a los abogados que figuran en una lista aprobada por el jefe del poder judicial.

69. El Relator Especial sigue sumamente preocupado por el funcionamiento continuado de los tribunales revolucionarios. Estos tribunales, creados tras la Revolución Islámica de 1979, llevaron a cabo juicios sumarios y arbitrarios para exterminar a los opositores políticos a la Revolución. Sin embargo, han seguido funcionando y han vulnerado sistemáticamente derechos humanos fundamentales, como el derecho a las debidas garantías procesales y el derecho a un juicio imparcial, recogidos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los tribunales revolucionarios son responsables de la gran mayoría de las condenas a pena de muerte, incluidas miles de ejecuciones sumarias y arbitrarias¹⁰⁸. Las estadísticas disponibles indican que durante el período 2010-2020, de 6.033 ejecuciones, 3.619 (el 59 %) se basaron en condenas a pena de muerte dictadas por los tribunales revolucionarios¹⁰⁹.

6. Situación de las mujeres y las niñas

70. A lo largo de su mandato, el Relator Especial ha formulado recomendaciones en las que pide a las autoridades que eliminen en la ley y en la práctica todas las formas de persecución, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas; adopten todas las medidas necesarias para fomentar su participación igualitaria en la vida pública; garanticen la protección de los derechos de las defensoras de los derechos humanos; y ratifiquen y apliquen plenamente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Lamenta que las autoridades iraníes hayan mantenido de hecho un sistema de *apartheid* de género y hayan insistido en leyes, políticas y prácticas draconianas que vulneran cada vez más los derechos humanos y la dignidad humana de las niñas y mujeres iraníes. El Relator Especial insta a las autoridades iraníes a que respeten los derechos humanos fundamentales y la dignidad de todas las niñas y mujeres iraníes y les permitan ejercer su derecho a tomar decisiones informadas sobre cómo expresarse, en particular sobre su vestimenta¹¹⁰.

71. El Relator Especial pide que se ponga fin de inmediato a la vigilancia de la vestimenta o el comportamiento de las mujeres en la vida pública o privada mediante el uso de la llamada policía de la moral o la tecnología de vigilancia.

72. El Relator Especial ha manifestado claramente en numerosas ocasiones la inaceptabilidad de la violencia contra las niñas y las mujeres. Sin embargo, le escandaliza la persistencia de leyes y prácticas que siguen apoyando y fomentando la violencia contra las mujeres y las niñas. La legislación misógina y las prácticas y comportamientos discriminatorios han seguido impregnando muchos aspectos de la vida pública y privada. El sistema de justicia penal sigue exonerando a los autores de actos de violencia contra las mujeres y las niñas, o reduciendo sus penas¹¹¹, así como eximiéndolos de responsabilidad penal y de la aplicación de la *qisa*, por ejemplo en los casos en que el marido descubre el adulterio de su esposa y agrede y mata a una o ambas partes¹¹².

73. El Relator Especial sigue sumamente preocupado por la edad de responsabilidad penal en la República Islámica del Irán. Asignar responsabilidad penal a las niñas a partir de los 9 años lunares por delitos *qisas* y *hudud* no solo ha dado lugar a casos trágicos, en los que niñas que han cometido delitos han sido condenadas a pena de muerte y ejecutadas, sino que también es discriminatorio por motivos de género y contraviene el derecho internacional de

¹⁰⁸ Véase, por ejemplo, <https://www.bbc.co.uk/news/magazine-34550377>.

¹⁰⁹ Iran Human Rights y ECPM, “Annual report on the death penalty in Iran 2020”, pág. 68.

¹¹⁰ CCPR/C/IRN/CO/4, párr. 20 b).

¹¹¹ A/HRC/46/50, párr. 51.

¹¹² *Ibid.* y Código Penal Islámico, arts. 301 y 630.

los derechos humanos. Al examinar estos casos, resulta trágico observar que las niñas ejecutadas eran a su vez víctimas, a menudo de violencia doméstica o de matrimonios forzados. El Relator Especial ya había expresado anteriormente su alarma por las ejecuciones de Mahboubeh Mofidi y Zeinab Sekaanvand en 2018¹¹³ y expresa su profunda preocupación por el caso de Samira Sabzian, ejecutada en diciembre de 2023¹¹⁴.

74. El Relator Especial lamenta la ausencia casi total de mujeres en puestos de liderazgo político y administrativo en el país, como demuestra el hecho de que no se aceptara la candidatura de una mujer para los cargos de Líder Supremo y Presidente. Actualmente, no hay mujeres en la Asamblea de Expertos, el Consejo de Discernimiento ni el influyente Consejo de Guardianes. La representación femenina sigue siendo escasa en el Parlamento iraní: en las elecciones parlamentarias de febrero de 2020, solo 16 de los 290 escaños (el 5,8 %) fueron obtenidos por mujeres y el 60 % de todas las candidatas fueron descalificadas por el Consejo de Guardianes¹¹⁵. No hay ninguna ministra en el Gabinete y, aunque tres mujeres fueron nombradas gobernadoras de condado de un total de 430 gobernaciones, todas fueron sustituidas tras la elección de Ebrahim Raisi como Presidente. Según se ha informado, en septiembre de 2023 habrá una mujer como gobernadora de condado y otra como Vicepresidenta para asuntos de la mujer y la familia¹¹⁶. Las mujeres son inelegibles para ocupar la presidencia del poder judicial y no pueden ser nombradas juezas.

75. Relacionada con la edad de madurez está la edad del matrimonio, que para las niñas sigue siendo actualmente de 13 años, e incluso niñas más jóvenes pueden casarse a instancias del padre y con la aprobación de los tribunales¹¹⁷. Los matrimonios infantiles son matrimonios forzados e intrínsecamente destructivos para la vida de las niñas. El Relator Especial está sumamente preocupado por el creciente número de matrimonios infantiles en los últimos años. Insta a las autoridades a que sigan las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos¹¹⁸, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer¹¹⁹ de poner fin a los matrimonios infantiles y elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para mujeres como para hombres.

76. A pesar de las oportunidades educativas disponibles para las niñas y las mujeres, existe una gran decepción por la discriminación de género inherente en todos los niveles institucionales, así como en la legislación, las prácticas y las actitudes sociales.

77. Para lograr la plena igualdad de género, es imperioso que la República Islámica del Irán se adhiera a las recomendaciones formuladas por el Relator Especial en sus informes anteriores, entre otras formas poniendo fin a la discriminación de género en el ámbito privado, en las leyes y prácticas relativas a la familia, y en el empleo, e introduciendo legislación y mecanismos eficaces para combatir la discriminación en el lugar de trabajo¹²⁰. También deben eliminarse todos los obstáculos que han impedido a las mujeres lograr una participación plena y efectiva en las actividades culturales y deportivas. Para lograr la plena igualdad *de jure* y *de facto* es necesario modificar la Constitución y la legislación, eliminar las restricciones a la participación igualitaria y efectiva de las mujeres y las niñas en los asuntos del Estado, y garantizar que todos los cargos políticos y judiciales estén abiertos a las mujeres en igualdad de condiciones¹²¹. El Relator Especial insta a las autoridades iraníes a que ratifiquen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

¹¹³ A/HRC/46/50, párr. 46. Véanse también <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/02/zeid-urges-iran-stop-violating-international-law-executing-juvenile>; y <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/10/bachelet-urges-iran-stop-executing-juvenile-offenders?LangID=E&NewsID=23689>.

¹¹⁴ Véase Namita Singh, "Iran executes child bride who killed abusive husband" *The Independent*, 21 de diciembre de 2023.

¹¹⁵ A/HRC/46/50, párr. 55.

¹¹⁶ Impact Iran, coalition submission, pág. 40.

¹¹⁷ Véanse Código Civil, art. 1041, y A/HRC/46/50, párr. 43.

¹¹⁸ CCPR/C/IRN/CO/4, párr. 17 c).

¹¹⁹ Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño (2019), aprobadas de manera conjunta, sobre las prácticas nocivas, párr. 55 f).

¹²⁰ A/HRC/46/50, párrs. 44, 45, 57 y 58.

¹²¹ A/HRC/46/50, párrs. 57 a 59 y 60 a 62.

contra la Mujer, sin reservas, y garanticen que la legislación y las políticas nacionales sean plenamente coherentes con sus obligaciones internacionales.

7. Situación de las minorías

78. Durante su mandato de seis años, el Relator Especial ha seguido sumamente preocupado por el carácter alarmante de las violaciones perpetradas contra las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Las minorías étnicas, entre ellas los kurdos, los baluchis, los árabes ahwazíes y los turcos azerbaiyanos, han sido sistemáticamente objeto de acoso, persecución y victimización, se les han denegado sus derechos fundamentales a la igualdad y la no discriminación, y se les ha privado de sus derechos lingüísticos y culturales y de su identidad. Muchos grupos étnicos, en particular los baluchis y los kurdos, se enfrentan también a la pobreza extrema, la indigencia y la denegación de la infraestructura política y económica necesaria para el crecimiento y el desarrollo. También se han enfrentado a altos niveles de discriminación en el acceso a la justicia y la participación política, y se les deniegan los derechos a la educación y el empleo, la asistencia sanitaria y los servicios públicos básicos. El activismo pacífico en favor de los derechos humanos y de las minorías por parte de miembros de grupos minoritarios ha sido considerado a menudo una amenaza para la seguridad nacional por los servicios de seguridad, lo que ha dado lugar a niveles desproporcionados de detenciones, encarcelamientos y ejecuciones.

79. Como Estado teocrático, que tiene la escuela Twelver Ja'fari del islam chií como religión oficial, las disposiciones de la Constitución y la legislación civil y penal discriminan fuertemente a las minorías religiosas no chiíes. Aunque la Constitución de la República Islámica del Irán de 1979 (modificada en 1989) establece que cristianos, judíos y zoroastras son las "únicas minorías religiosas reconocidas"¹²², las minorías religiosas no reconocidas, en particular los bahaíes, los cristianos conversos, los sufíes, incluida la orden Gonabadi, los yaresaníes y los mandeos sabios, siguen siendo objeto de legislación discriminatoria y persecución persistente. La falta de reconocimiento constitucional y legal de estas minorías religiosas ha dado lugar a la denegación de sus derechos humanos fundamentales y sus derechos como minoría.

80. Durante más de cuatro decenios, los miembros de la fe bahaí, la mayor minoría religiosa no musulmana y no reconocida constitucionalmente, han sufrido las formas más atroces de violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones, persecuciones, privación de derechos de propiedad, profanación y destrucción de cementerios, violencia y detenciones arbitrarias, denegación de derechos educativos, cierres de negocios, propaganda de odio e injusticias sociales, y desigualdades en todos los ámbitos de la vida pública y privada¹²³. Dado que las conversiones del islam no están permitidas, los cristianos conversos se enfrentan al riesgo de apostasía y blasfemia, que conllevan la pena de muerte. Los cristianos conversos son objeto de persecución y acoso, y muchos de los detenidos son acusados de difundir "propaganda contra el sistema", "divulgar el cristianismo evangélico sionista" o "administrar y gestionar casas iglesia"¹²⁴. La persecución sistemática, iniciada por el Estado, de los cristianos conversos, incluida la denegación por la fuerza de su derecho a la libertad de religión o de creencias, constituye una vulneración sustancial de sus derechos. El Relator Especial reitera su recomendación anterior de que las autoridades garanticen que todas las personas reciban el mismo trato ante la ley y en la práctica, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, orientación sexual y opinión política o de otra índole¹²⁵, y que todos los iraníes tengan derecho a la libertad de religión o de creencias, según lo dispuesto en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹²⁶.

8. Impunidad institucional persistente y ausencia de rendición de cuentas

81. El Relator Especial lamenta que no se haya aplicado ninguna de sus recomendaciones relativas a poner fin a la impunidad institucional y garantizar la rendición de cuentas por

¹²² https://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch01.php, article 13.

¹²³ A/74/188, párrs. 47 a 56; A/HRC/49/75, párr. 45; y A/78/326, párr. 37.

¹²⁴ A/74/188, párr. 59.

¹²⁵ A/74/188, párr. 97 e).

¹²⁶ *Ibid.*, párr. 97 f).

violaciones graves de los derechos humanos. La impunidad persistente y la ausencia de rendición de cuentas siguen siendo una característica notable pero desafortunada del ordenamiento constitucional, político y jurídico de la República Islámica del Irán. En marzo de 2022, el Relator Especial señaló al Consejo de Derechos Humanos que: “La impunidad institucional y la falta de un sistema de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos impregnan el sistema político y jurídico de la República Islámica del Irán. Esta ausencia de rendición de cuentas dimana de varias deficiencias dentro de las estructuras del Estado, como la negación de los principios del estado de derecho y de la separación de poderes”¹²⁷.

82. El pronóstico del Relator Especial en ese informe de marzo de 2022 resultó trágicamente acertado en los acontecimientos que se desarrollaron ese mismo año y entrañaron la muerte durante la detención policial de la Sra. Amini el 16 de septiembre de 2022. El Relator Especial está sumamente consternado por la falta de toda investigación independiente, imparcial y transparente sobre la muerte durante la detención policial de la Sra. Amini, así como por los homicidios de cientos de manifestantes, en particular mujeres y niños, en el contexto de las protestas subsiguientes. El Relator Especial denunció el uso ilícito de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, que causó la muerte de por lo menos 537 manifestantes, entre ellos al menos 68 niños y 48 mujeres, y heridas a centenares, al tiempo que, según informes, miles de personas fueron detenidas, recluidas o encarceladas¹²⁸. A pesar de las gravísimas tragedias a las que se enfrenta el pueblo iraní, es motivo de extrema decepción que las autoridades no hayan emprendido investigaciones imparciales, independientes y transparentes en esos casos. Ninguno de los agentes de seguridad u otros responsables ha rendido cuentas, ni ha sido sancionado o destituido de su cargo.

83. Del mismo modo, el Relator Especial lamenta que las autoridades no hayan llevado a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre el presunto envenenamiento de miles de alumnas en 2022 y 2023¹²⁹. Aunque las autoridades afirmaron haber investigado estos hechos, hasta ahora no se sabe con certeza si se ha responsabilizado a alguna persona de los ataques con veneno dirigidos contra escuelas de niñas.

84. Durante el período de protestas a escala nacional, las minorías étnicas y religiosas, en particular los baluchis y los kurdos, fueron objeto de persecución y sus protestas brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Como se ha señalado anteriormente, más de la mitad del número total de personas muertas en las protestas a escala nacional proceden de provincias pobladas por kurdos y baluchis, y los niños de estos dos grupos minoritarios constituyen el 63 % de las víctimas infantiles registradas¹³⁰. Las pruebas y testimonios que se han presentado al Relator Especial desde septiembre de 2022 de asesinatos sistemáticos, desapariciones forzadas, torturas, lesiones corporales graves, represión extrema, persecución, violaciones, violencia, incluida la violencia sexual y de género, y detenciones masivas y arbitrarias por parte del Estado lo han llevado a considerar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad¹³¹.

85. Como ha señalado anteriormente, el Relator Especial lamenta que, al no atender a sus preocupaciones por la impunidad persistente, las autoridades no hayan adoptado medidas para establecer un marco de rendición de cuentas en la ley o en la práctica, a fin de crear canales efectivos para obtener verdad y justicia y garantizar que no se produzcan violaciones graves de los derechos humanos, incluida la privación arbitraria de la vida.

86. Además de las atrocidades más recientes, el Relator Especial, otros mecanismos de derechos humanos y la sociedad civil han documentado ejemplos históricos de graves violaciones de los derechos humanos, como el asesinato de manifestantes, torturas, detenciones, reclusiones, ejecuciones y desapariciones forzadas de un gran número de personas en las protestas nacionales de 2009, 2019, 2020 y 2021. Entre otros ejemplos figuran las desapariciones forzadas a gran escala y las ejecuciones sumarias y arbitrarias de disidentes políticos reales o presuntos, incluidos niños, en 1981, 1982 y 1988. El Relator Especial

¹²⁷ A/HRC/49/75, párr. 48.

¹²⁸ A/78/326, párr. 9.

¹²⁹ *Ibid.*, párrs. 54 a 57.

¹³⁰ A/HRC/52/67, párr. 28.

¹³¹ *Ibid.*, párrs. 13 a 62 y 75 f).

lamenta constatar que ninguno de estos hechos ha sido objeto de investigación o indagación por parte de las autoridades iraníes y que los responsables siguen sin rendir cuentas¹³². En cambio, la maquinaria del Estado se ha desplegado para destruir cualquier prueba que quede de esos delitos, así como para acosar y perseguir a las personas que piden rendición de cuentas y justicia, en lo que parece ser una política decidida de borrar esos hechos de la memoria¹³³.

87. La cultura de perpetuar la impunidad ha evolucionado hasta convertirse en una política estatal de intimidación, acoso y persecución de todos aquellos que buscan la rendición de cuentas, la verdad y la justicia. La impunidad institucional y arraigada se ha traducido en el hostigamiento sistemático de defensores de los derechos humanos, abogados y otras personas que hacen campaña en favor de la rendición de cuentas, en una pauta que ha surgido a lo largo de varios decenios, según la cual a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a sus familias se les deniega sistemática y constantemente la verdad y el acceso a la justicia.

88. El Relator Especial lamenta que la ausencia de un poder judicial independiente, su constante politización, en particular mediante el uso de los tribunales revolucionarios, haya sido un factor importante en la deficiencia de la rendición de cuentas en el país. El poder judicial, incluidos los tribunales revolucionarios, vulnera persistentemente el estado de derecho, los principios de justicia natural y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por la República Islámica del Irán. Las autoridades iraníes se han negado sistemáticamente a llevar a cabo investigaciones que se ajusten al derecho internacional sobre las violaciones manifiestas de los derechos humanos, a pesar de los continuos llamamientos de órganos y expertos de las Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos a que se realicen tales investigaciones. En lugar de permitir a las víctimas, sus familias o sus abogados una participación efectiva en las investigaciones, frecuentemente se los intimida y maltrata en un intento por impedirles presentar denuncias o protestar o por disuadirlos de hacerlo.

89. El Relator Especial expresa su extrema decepción por la cultura de impunidad y la ausencia de rendición de cuentas que prevalece a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos años ha surgido la posibilidad de exigir responsabilidades al Estado en el marco del derecho internacional, y a los individuos en tribunales extranjeros e internacionales o mediante el uso de la jurisdicción universal. Las familias de los fallecidos en el derribo del vuelo 752 de Ukrainian Airlines son víctimas de una continua y grave injusticia. Esas familias piden rendición de cuentas, que se revele la verdad y se haga justicia¹³⁴. En julio de 2023, el Canadá, Suecia, Ucrania y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentaron una demanda contra la República Islámica del Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el derribo por las autoridades iraníes del avión de pasajeros ucraniano, alegando que el Irán “no había llevado a cabo una investigación y un enjuiciamiento penales imparciales, transparentes y justos acordes con el derecho internacional”¹³⁵. En julio de 2022, haciendo uso de la jurisdicción universal, el Tribunal de Distrito de Estocolmo declaró a Hamid Nouri culpable de crímenes de guerra y asesinato, y lo condenó a reclusión a perpetuidad por su papel en las masacres de 1988 en la República Islámica del Irán, cuando miles de presos políticos fueron ejecutados por orden del ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces Líder Supremo¹³⁶. El 12 de diciembre de 2023, en su sentencia, el Tribunal de Apelación de Estocolmo confirmó la condena y la pena impuestas a Hamid Nouri¹³⁷.

¹³² A/HRC/49/75, párr. 59.

¹³³ *Ibid.* Y véase también communication IRN 20/2020, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25503>.

¹³⁴ Véase <https://www.ps752justice.com/the-associations-statement-on-the-4th-anniversary-of-downing-of-flight-ps752/>.

¹³⁵ Véase <https://www.icj-cij.org/node/202866>.

¹³⁶ A/HRC/52/67, párr. 72. Véanse también www.aljazeera.com/news/2022/7/14/sweden-hands-life-sentence-to-ex-iranian-official-over-1988-purge; y <https://www.iranrights.org/newsletter/issue/126>.

¹³⁷ Véanse <https://www.iranrights.org/newsletter/issue/139>; y <https://www.dw.com/en/sweden-upholds-life-sentence-in-iran-prison-executions-case/a-67771180>.

IV. Impacto de las sanciones económicas

90. Como se ha señalado en informes anteriores del Relator Especial, el impacto de las sanciones ha afectado cada vez más a los iraníes de a pie y a su disfrute de una serie de derechos humanos, en particular los derechos económicos y sociales. El impacto de las sanciones ha tenido amplios efectos en la economía iraní, desde la venta de petróleo hasta las restricciones a comerciantes y empresas. La tasa de inflación anual en julio de 2023 fue del 47,7 %, y la inflación alimentaria se registró por encima del 70 % en 12 provincias¹³⁸, lo que hace cada vez más difícil para muchos iraníes permitirse el ejercicio de los derechos económicos y sociales básicos y contribuye a aumentar la pobreza y la desigualdad, lo que afecta a los más necesitados y a los que se quedan atrás. Además, al impedir las transferencias financieras al país, la reimposición de las sanciones ha dificultado aún más la disponibilidad y distribución de equipos y suministros médicos y farmacéuticos esenciales¹³⁹.

V. Conclusiones y recomendaciones

91. El Relator Especial recomienda a la República Islámica del Irán que colabore y coopere con el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, entre otras formas permitiendo que el Relator Especial visite el país.

92. El Relator Especial hace un llamamiento a las autoridades para que supriman inmediatamente, mediante la legislación, la pena de muerte para todos los delitos. En espera de su abolición completa, recomienda a las autoridades que:

a) Impongan una moratoria inmediata de las ejecuciones y conmuten todas las condenas a pena de muerte;

b) Abolán la pena de muerte para los delitos que no formen parte de los “más graves delitos” según el derecho internacional de los derechos humanos;

c) Impongan una moratoria inmediata de todas las ejecuciones relacionadas con las drogas;

d) Modifiquen urgentemente la legislación para prohibir la ejecución de personas que hayan cometido un delito siendo menores de 18 años y modifiquen urgentemente la legislación para conmutar todas las condenas a pena de muerte de jóvenes infractores;

e) Modifiquen la legislación para conferir a los jueces facultades discrecionales en los casos de *qisas* para considerar circunstancias atenuantes u optar por la imposición de penas más leves en casos individuales;

f) Pongan fin a las ejecuciones desproporcionadas de minorías étnicas.

93. El Relator Especial recomienda a las autoridades iraníes que:

a) Garanticen que la legislación, las políticas, las prácticas y la formación relativas al uso de la fuerza letal por parte de los agentes del orden y los funcionarios de fronteras se ajustan a las normas internacionales, incluidos el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

b) Garanticen que los presos y detenidos estén protegidos frente a todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, garanticen que las confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos nunca se admitan como prueba ante un tribunal, establezcan mecanismos para investigar las denuncias de

¹³⁸ Véanse <https://www.tehrantimes.com/news/487589/Tehran-province-records-lowest-inflation-rate> y <https://www.iranintl.com/en/202212090745>.

¹³⁹ Véase Human Rights Watch, “Maximum Pressure”. *US Economic Sanctions Harm Iranians’ Right to Health* (2019).

tortura y muertes durante la detención, en consonancia con las normas internacionales, y ratifiquen la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

c) Garanticen que todas las personas acusadas de cualquier delito tengan derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales, de plena conformidad con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el acceso a un abogado de su elección durante todas las fases del proceso judicial;

d) Velen por que los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, los abogados, los periodistas y los ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, así como sus familias, no sean víctimas de amenazas ni de intimidación, acoso, detención arbitraria, privación de libertad o del derecho a la vida, u otras sanciones arbitrarias, y liberen a todos los detenidos;

e) Pongan en libertad a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica;

f) Modifiquen el artículo 13 de la Constitución para garantizar que todas las minorías religiosas y quienes no profesan ninguna creencia religiosa sean reconocidas y puedan disfrutar plenamente del derecho a la libertad de religión o creencia;

g) Modifiquen todos los artículos del Código Penal Islámico que discriminan por motivos de religión o creencias;

h) Garanticen que todas las personas que se encuentren en el territorio de la República Islámica del Irán y estén sujetas a su jurisdicción reciban el mismo trato ante la ley, sin distinción de ningún tipo por razones de raza, sexo, idioma, religión, orientación sexual y opinión política o de otro tipo;

i) Pongan fin al hostigamiento y la persecución de miembros de minorías religiosas reconocidas y no reconocidas y la aplicación selectiva de medidas en su contra, se abstengan de presentar contra ellas cargos relacionados con la seguridad nacional y pongan fin a la criminalización de la expresión pacífica de la fe;

j) Se abstengan de perseguir las reuniones religiosas pacíficas en domicilios particulares y otros locales y de condenar a los líderes religiosos, y pongan fin a la vigilancia de los ciudadanos por razón de su identidad religiosa;

k) Permitan a todos los estudiantes de minorías étnicas y religiosas reconocidas y no reconocidas el acceso pleno y en igualdad de condiciones a las universidades estatales en función de sus méritos académicos;

l) Garanticen que las lenguas minoritarias se ponen a disposición de los niños de minorías étnicas en la escuela primaria;

m) Desarrollen políticas y dirijan recursos para el desarrollo económico, social, cultural y político de las zonas pobladas por la minoría suní, incluidos kurdos, baluchis, árabes ahwazíes y azeríes;

n) Deroguen todas las leyes y reglamentos que impongan un código de vestimenta obligatorio, y abolan los reglamentos y procedimientos por los que los organismos estatales vigilan o controlan la vestimenta o el comportamiento de las mujeres en la vida pública o privada;

o) Deroguen la legislación que suprime o atenúa la responsabilidad penal de los autores de actos de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los denominados asesinatos por honor y los actos delictivos dentro del matrimonio;

p) Modifiquen la Constitución y deroguen las leyes y prácticas discriminatorias de género existentes;

q) Pongan fin al matrimonio infantil, entre otras formas elevando a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio;

r) Lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas, efectivas, creíbles y transparentes sobre las muertes de Jina Mahsa Amini, Armita Geravand y las de todas las niñas y mujeres desde septiembre de 2022, y garanticen que todos los responsables rindan cuentas;

s) Realicen investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre el homicidio de manifestantes y sobre los actos de violencia, incluida la tortura, las desapariciones forzadas y las detenciones que han tenido lugar en el contexto de las protestas a escala nacional desde el 16 de septiembre de 2022;

t) Pongan fin de inmediato a todas las formas de violencia, detenciones y reclusiones arbitrarias de manifestantes, encuentren y detengan a todos los sospechosos de actos delictivos y violentos contra manifestantes, y garanticen que todos los responsables rindan cuentas de sus actos;

u) Pongan fin de inmediato a todas las formas de violencia, incluidas la violación y la violencia sexual y el acoso a niñas y mujeres manifestantes, lleven a cabo investigaciones inmediatas, independientes e imparciales sobre las persecuciones de niñas y mujeres y los actos de violencia en su contra, incluidas la violación y la violencia sexual, y sobre la discriminación contra niñas y mujeres, y adopten de inmediato medidas concretas para detener y castigar a todos los implicados en delitos violentos contra niñas y mujeres, incluido el envenenamiento de niñas en las escuelas;

v) Pongan en libertad inmediatamente a todos los extranjeros y personas con doble nacionalidad que han sido detenidos arbitrariamente;

w) Emprendan reformas fundamentales para establecer un sistema de rendición de cuentas acorde con el derecho internacional, que incluya reformas constitucionales, legislativas y administrativas para garantizar la separación de poderes, el pluralismo político y la participación democrática en la gobernanza y la toma de decisiones;

x) Emprendan reformas para garantizar la plena independencia del poder judicial, entre otras formas mediante la disolución de los tribunales revolucionarios, así como para velar por la transparencia en los nombramientos judiciales, que deben realizarse en función del mérito y sin ninguna condición discriminatoria.

94. El Relator Especial insta a la comunidad internacional a que dé prioridad a las cuestiones de derechos humanos y al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en todas las negociaciones y acuerdos con la República Islámica del Irán.

95. El Relator Especial insta a la comunidad internacional a que exija responsabilidades por los hechos emblemáticos de larga data a los que se ha respondido con una impunidad persistente, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias y arbitrarias de 1981 y 1988 y las protestas de noviembre de 2019.

96. El Relator Especial insta a los Estados que han impuesto sanciones a la República Islámica del Irán a que velen por que las medidas como las exenciones humanitarias tengan un efecto amplio y práctico y se apliquen con prontitud y eficacia a fin de reducir al mínimo las consecuencias adversas de las sanciones en los derechos humanos.

Anexo

Recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, Javaid Rehman

Year	Para. N°	Source reference	Full recommendation
2018	33	A/73/398	The Special Rapporteur reiterates the previous calls made by his predecessor and the Secretary-General that all those arrested for the peaceful exercise of the rights to freedom of assembly and of opinion and expression be released, including those arrested during the protests in December 2017 and January 2018. The Special Rapporteur further calls upon the Government to undertake an independent and transparent investigation into the reported deaths in custody and other incidents leading to alleged violations of rights that took place during and after the protests.
2018	34	A/73/398	The Special Rapporteur calls upon the Government to uphold the fundamental human rights of freedom of opinion and expression and to repeal all laws and policies which criminalize or restrict online expression, with online content to be restricted only by independent and impartial judicial decisions.
2018	35	A/73/398	The Special Rapporteur expresses his grave concern at the continuing execution of juvenile offenders in the Islamic Republic of Iran and calls upon the Government to immediately prohibit all executions of persons charged with offences that they committed when under the age of 18 years. He further recommends that the Government abolish the death penalty in all cases and, pending that measure, introduce a moratorium.
2018	36	A/73/398	The Special Rapporteur calls upon the Government to ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and urges the Government to enact laws prohibiting the punishments of flogging and amputations, as they represent cruel, inhuman or degrading punishments and violate articles 7 and 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
2018	37	A/73/398	The Special Rapporteur calls upon the Government to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and to prohibit all forms of discrimination against women, both in law and in practice.
2018	38	A/73/398	The Special Rapporteur calls upon the Government to fully respect the rights of religious and ethnic minorities in the Islamic Republic of Iran and to ensure that all those who reside in the country have equal protection before the law, regardless of ethnicity, religion or belief.
2019	70a	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: (a) Pending abolishment, remove from the scope of the death penalty any offence other than the “most serious crimes, <i>Äö</i> ” which are confined to intentional killing, and ensure that all those sentenced to death for other offences have their sentences commuted. Amend legislation to ensure that any person sentenced to death, including on the basis of <i>qisas</i> , can seek pardon or commutation from the State.
2019	70b	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Ensure that prisoners are protected from all forms of torture and other ill-treatment. Ensure that confessions obtained through such treatment are never admitted as evidence against the accused.
2019	70c	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Amend the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to ensure that confessions alone are not sufficient for admission of guilt.
2019	70d	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Ensure that medical care is urgently provided to those individuals in detention who need it, including those identified in the present report, in light of the imminent threat to life or serious deterioration of their health. Ensure that all individuals in custody receive adequate, prompt and regular health care, including specialist care as needed, on the basis of their informed consent.

Year	Para. N°	Source reference	Full recommendation
2019	70e	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Ensure that deaths in custody, and allegations of violations of due process and of ill-treatment are promptly, independently, impartially and effectively investigated by an independent competent authority with a view to bringing those suspected of criminal responsibility to justice in compliance with their right to a fair trial.
2019	70f	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Ensure that all persons accused of any crime are assured access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process, including during the initial investigation and interrogation stage, and are provided with legal aid as needed.
2019	70g	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Ensure that all prisoners with health conditions for whom staying in prison would mean an exacerbation of their condition are not detained in prison, and issue alternative sentences if there is no prospect of recovery through the full implementation of article 502 of the Code of Criminal Procedure.
2019	70h	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Protect the rights of all persons belonging to religious and ethnic minorities and address all forms of discrimination against them, and release all those imprisoned for having exercised their right to freedom of religion or belief.
2019	70i	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Ensure that all those arrested for the peaceful exercise of their rights to freedom of opinion, expression, assembly and association are released. Promptly report to the families the whereabouts and situation of individuals taken into custody.
2019	70j	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, and lawyers and journalists are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrest, deprivation of liberty or other arbitrary sanction, and release all those detained in connection with their work.
2019	70k	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Implement the recommendations reflected in the opinions of the Working Group on Arbitrary Detention, and address patterns of violations highlighted by the Working Group with respect to dual and foreign nationals.
2019	70l	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the Government and Parliament: Take all measures necessary to mitigate some of the effects of economic sanctions, and to meet its obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including on the protection of vulnerable groups. Establish a transparent financial mechanism to ensure that trade in medicines and other essential humanitarian items continues.
2019	71	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that sanctions-imposing countries take all steps to ensure that sanctions in the Islamic Republic of Iran do not undermine human rights, including by ensuring that humanitarian and procedural safeguards and exemptions prevent a harmful impact on the enjoyment of human rights.
2019	73a	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that Parliament: Urgently amend legislation to prohibit the execution of persons who committed a <i>hudud</i> or <i>qisas</i> crime while below the age of 18 years and as such are children. Urgently amend the legislation to commute all existing sentences for child offenders on death row.
2019	73b	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that Parliament: Withdraw the general reservation to the Convention on the Rights of the Child given that such a general reservation is not compatible with the object and purpose of the Convention.
2019	73c	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that Parliament: Amend the Penal Code to increase the age of criminal responsibility for <i>qisas</i> and <i>hudud</i> crimes to 18 years for all children and ensure that all children are treated equally and without discrimination within the criminal justice system.

Year	Para. N°	Source reference	Full recommendation
2019	74a	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the judiciary: (a) Urgently halt the planned execution of all child offenders and commute the death sentences imposed on the basis of <i>qisas</i> and <i>hudud</i> crimes for all child offenders.
2019	74b	A/HRC/40/67	The Special Rapporteur recommends that the judiciary: Pending legislative review, urgently issue a circular which requires all judges not to sentence children to death on the basis of <i>qisas</i> or <i>hudud</i> crimes, and which requires presiding judges to order retrials for all child offenders on death row without recourse to the death penalty.
2019	75a	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: (a) Require courts to comprehensively assess mental development in all cases in line with article 91 of the Penal Code, and to always seek expert advice from the relevant child development, psychology, psychiatry, and social service fields as well as from the Iranian Legal Medicine Organization, with a view to ensuring that the child is exempted from the death penalty.
2019	75b	A/HRC/40/67	Ensure that any article 91 assessment is conducted on the prima facie basis that there is uncertainty about the mental development of the child, and as such a death sentence cannot be imposed. Ensure that the burden of proof is always on the prosecution to establish complete certainty about the full mental development of the child, in line with article 91. Furthermore, ensure that the child is afforded the benefit of the doubt if the assessment is not undertaken immediately after the crime.
2019	75c	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: Undertake a prompt, effective and transparent review of all child offenders on death row and ensure that they are afforded legal representation and financial and other needed support to exercise their right to a retrial as provided for by article 91 of the Penal Code.
2019	75d	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: Ensure that children who have been detained or arrested are interviewed only in the presence of their chosen lawyer, are immediately granted legal aid if needed, and are granted access to a family member of their choice at all times regardless of the offence they are accused of.
2019	75e	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: When assessing the quality and veracity of testimony or confession offered by the child, ensure that the judge considers all circumstances of interrogation, especially the age of the child as well as the length of detention and interrogation and the presence of legal or other representatives and parents during questioning.
2019	75f	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: Require that all those who deal with children in the criminal justice system, especially judges, prosecutors, medical examiners, police interrogators and other law enforcement professionals, undergo specialist, ongoing and systematic training on the rights of the child. Such training should inform participants about how to take into account the child's physical, psychological,

Year	Para. N°	Source reference	Full recommendation
			mental and social development in a manner consistent with the obligations of the Islamic Republic of Iran under international human rights law.
2019	75g	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: Establish specialist and separate child courts to consider cases involving children, for all crimes including <i>qisas</i> and <i>hudud</i> crimes, in the first instance and on appeal, in all provinces. Ensure that the judges who preside over such courts, and the prosecutors who are able to bring cases before such courts, have a minimum level of professional qualifications and expert training in child sociology, child psychology and behavioural sciences.
2019	75h	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: Ensure that the court takes into account the circumstances in which the child is living and the conditions in which any offence has allegedly been committed, including through the preparation, introduction and full consideration of pre-sentence reports. Ensure that the court is informed about all relevant facts about the child, such as social and family background, wealth, education and circumstances of marriage. Ensure that adequate social services capacity has been established to be able to provide such reports and is mandated to provide such advice.
2019	75i	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: Ensure that detention pending trial is only used as a measure of last resort and for the shortest possible period of time for children accused of any crime, including <i>qisas</i> and <i>hudud</i> crimes.
2019	75j	A/HRC/40/67	Pending implementation of the aforementioned recommendations, and without prejudice to the binding obligation enshrined in the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights to not sentence children to death and to not execute child offenders, the Special Rapporteur recommends that the judiciary: Provide the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Special Rapporteur with a list of all child offenders on death row.
2019	96a	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader and relevant legislative institutions: Amend article 13 of the Constitution to ensure that all religious minorities and those who do not hold any religious beliefs are recognized and able to fully enjoy the right to freedom of religion or belief.
2019	96b	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader and relevant legislative institutions: Amend all articles in the Islamic Penal Code that discriminate on the basis of religion or belief.
2019	96c	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader and relevant legislative institutions: (c) Amend existing legislation to abolish the death penalty for crimes not meeting the “most serious crime” threshold according to international human rights law.
2019	96d	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader and relevant legislative institutions: (d) Urgently amend legislation to prohibit the execution of persons who committed a <i>hudud</i> or <i>qisas</i> crime while under 18 years of age and who, accordingly, are children.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2019	96e	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader and relevant legislative institutions: (e) Urgently amend the legislation to commute all existing sentences for child offenders on death row.
2019	96f	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader and relevant legislative institutions: (f) Repeal the established gozinesh requirements and any other policies that condition access to employment on the basis of individual beliefs, in line with the Constitution.
2019	97a	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: a) Permit the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran to enter the country for monitoring visits.
2019	97b	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: b) Ensure that all persons accused of any crime are afforded due process and fair trial guarantees, including access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process and are provided with legal aid and access to interpreters during court proceedings.
2019	97c	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: c) Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, and human rights lawyers and journalists are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrest, deprivation of liberty or other arbitrary sanction, and release all those detained in connection with their work.
2019	97d	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: d) Immediately release all dual and foreign nationals arbitrarily detained in the Islamic Republic of Iran.
2019	97e	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: e) Ensure that all individuals within its territory and subject to its jurisdiction are treated equally before the law without distinction of any kind such as race, sex, language, religion, sexual orientation and political or other opinion.
2019	97f	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: f) In accordance with article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Islamic Republic of Iran is a party, ensure that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, including the freedom to have or to adopt a religion or belief of their choice, or not to have or adopt a religion, and the freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest their religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
2019	97g	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: g) Refrain from targeting members of recognized and non-recognized religious minorities with national security-related charges and end the criminalization of the peaceful expression of faith.
2019	97h	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: h) Cease the indiscriminate killings of border couriers and take measures to regularize their work.
2019	97i	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: i) Allow places of worship for all religious minorities to be opened, including Sunni mosques and new churches throughout the country.
2019	97j	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: j) Refrain from persecuting peaceful religious gatherings in private homes and other premises, refrain from convicting religious leaders and cease the monitoring of citizens on account of their religious identity.
2019	97k	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: k) Allow all students of ethnic and recognized and non-recognized religious minorities full and equal access to State universities on the basis of academic merit.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2019	97l	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: l) Ensure that minority languages are made available to children of ethnic minorities at the primary school level.
2019	97m	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: m) Develop policies and direct resources for the economic, social, cultural and political development of areas populated by the Sunni minority, including Kurds, Baluchis and Azeris.
2019	97n	A/74/188	The Special Rapporteur recommends that the Government of the Islamic Republic of Iran: n) Implement all the previous recommendations made by the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.
2020	68a	A/HRC/43/61	Undertake prompt, independent and impartial investigations into all acts of violence that have taken place in the context of the November 2019 protests, including deaths of protesters and reported deaths in custody, and into reports of ill-treatment, and to hold those responsible accountable.
2020	68b	A/HRC/43/61	Ensure that all those arrested, including those arrested during the November 2019 protests, for the peaceful exercise of their rights to freedom of opinion, expression, assembly and association are released, and ensure also that the detaining authorities promptly report the whereabouts and situation of detainees to their families.
2020	68c	A/HRC/43/61	Take all measures necessary to mitigate the effects of economic sanctions, meet the obligations of the Islamic Republic of Iran under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including on the protection of vulnerable groups, and establish transparent financial mechanisms to ensure that trade in medicines and other essential humanitarian items continues.
2020	68d	A/HRC/43/61	Pending its abolishment, remove the death penalty as punishment for all offences other than the most serious crimes, which involve intentional killing, and ensure that all individuals sentenced to death for offences other than intentional killing have their sentences commuted.
2020	68e	A/HRC/43/61	Ensure that prisoners and detainees are protected from all forms of torture and ill-treatment and that confessions obtained through torture or ill-treatment are never admitted as evidence against the accused.
2020	68f	A/HRC/43/61	Amend the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure to ensure that confessions alone are not sufficient for establishing guilt.
2020	68g	A/HRC/43/61	Ensure that all persons accused of any crime have access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process, including during the initial investigation and interrogation stage, and are provided with legal aid as needed.
2020	68h	A/HRC/43/61	Protect the rights of all persons belonging to religious and ethnic minorities, address all forms of discrimination against them and release all those imprisoned for having exercised their right to freedom of religion or belief.
2020	68j	A/HRC/43/61	Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, lawyers and journalists, are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrest, deprivation of liberty or other arbitrary sanction, and release all those detained in connection with their work.
2020	68i	A/HRC/43/61	Ensure that lethal force is used only when strictly unavoidable to protect life, in accordance with principle 9 of the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and that everyone is allowed to participate in lawful and peaceful assemblies, in accordance with article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
2020	68k	A/HRC/43/61	End the policy of prohibiting or severely limiting women's attendance at public sporting events, and bring both laws and policies protecting women's rights into compliance with international standards.
2020	68l	A/HRC/43/61	Immediately release all dual and foreign nationals arbitrarily detained.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2020	70a	A/HRC/43/61	Ensure that medical care is urgently provided to those individuals in detention who need it, in light of the imminent threat to life or serious deterioration of their health, and that all individuals in custody receive adequate, prompt and regular health care, including specialist care as needed, on the basis of their informed consent.
2020	70b	A/HRC/43/61	Ensure that all detained individuals receive adequate health care, without discrimination on grounds of political or legal situation, ethnicity, religion, political opinion, gender, sexual orientation or other status.
2020	70c	A/HRC/43/61	Ensure that all prisoners requiring specialist or any other treatment not available within prison are transferred free of cost to specialized institutions or outside hospitals to receive such treatment and that they remain in those institutions or hospitals for as long as the treatment is deemed necessary by specialist doctors.
2020	70d	A/HRC/43/61	End the unlawful practice of requiring prisoners to pay for medical treatment, which violates both international and Iranian law.
2020	70e	A/HRC/43/61	Ensure that medical decisions that relate to ongoing care and observation of the prisoners outside prison and the necessity of their release on medical grounds are only taken by the relevant, responsible health-care professionals.
2020	70f	A/HRC/43/61	Adopt regulations restricting the use of restraints in accordance with international laws and standards, including by ensuring that restraints are never used in a degrading, humiliating or painful manner or as a form of punishment and that they are used only when strictly necessary.
2020	70g	A/HRC/43/61	Ensure that medical care for detainees is never made conditional upon their making confessions and that officials who deny medical care to prisoners and detainees or who withhold medication as a form of coercion, as punishment or to elicit confessions are punished.
2020	70h	A/HRC/43/61	Pass the parliamentary bill introduced in September 2019 aimed at ending the recording and broadcasting of confessions on State-funded media prior to trial and ensure punishments for those involved in recording and broadcasting such confessions.
2020	70i	A/HRC/43/61	Pending its abolishment, ensure that solitary confinement is used only in exceptional cases, as a last resort and for as short a time as possible, following authorization by a competent authority and subject to independent review.
2020	70j	A/HRC/43/61	Make substantial investments in all prisons to reduce overcrowding, provide adequate sleeping facilities to prisoners and ensure that the essential personal hygiene of prisoners is maintained.
2020	70k	A/HRC/43/61	Ensure that prisoners are provided with food of appropriate nutritional value, quantity and quality and that drinking water is made readily available to all prisoners.
2020	70l	A/HRC/43/61	Ensure furlough and family visitation rights to all prisoners.
2020	70m	A/HRC/43/61	Respect and fulfil the duty to conduct prompt, independent, impartial and effective investigations into all reports of torture or other ill-treatment and hold perpetrators accountable.
2020	70n	A/HRC/43/61	Ensure that deaths in custody and allegations of violations of due process and of ill-treatment are promptly, independently, impartially and effectively investigated by an independent competent authority with a view to holding perpetrators accountable and in compliance with the right to a fair trial.
2020	55a	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (a) To undertake prompt, independent and impartial investigations into all acts of violence that took place during the November 2019 and January 2020 protests, including deaths and injuries of protesters and ill-treatment in custody; identify all those suspected of responsibility for criminal acts against protesters and bystanders; and hold accountable those responsible in trials that conform to international fair trial standards.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2020	55b	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (b) To ensure all investigations into the incidents of November 2019 and January 2020 are conducted consistent with international standards and that families of victims are effectively included in the investigation process, do not face harassment and receive adequate compensation for the violation of their human rights.
2020	55c	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (c) To determine the causes, circumstances and location of all deaths and injuries that occurred during the November 2019 and January 2020 protests and make public all information gathered, including the overall figures.
2020	55d	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (d) To ensure legislation, policies, practices and training concerning the use of lethal force by law enforcement officials are compliant with international standards, including the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
2020	55e	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (e) To ensure that all those arrested, including during the November 2019 and January 2020 protests, for the exercise of their rights to freedom of opinion, expression, association and peaceful assembly are released and that the detaining authorities promptly report the whereabouts and situation of detainees to their families.
2020	55f	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (f) To abolish the death penalty, introduce an immediate moratorium on its use, and prohibit the execution of child offenders in all circumstances and commute their sentences.
2020	55g	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (g) To ensure that all persons accused of any crime have access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process, including during the initial investigation and interrogation stage, and are provided with legal aid as needed; ensure that prisoners and detainees are protected from all forms of torture and ill-treatment and that confessions obtained through torture or ill-treatment are never admitted as evidence; and ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2020	55h	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (h) To repeal laws authorizing the use of torture and ill-treatment as a form of punishment.
2020	55i	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (i) To ensure that prompt, thorough and effective investigations are undertaken by independent and impartial bodies into all deaths in custody and reports of torture or other ill-treatment, and that those responsible are held accountable.
2020	55j	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (j) To ensure the right to freedom of opinion and expression in law and in practice, and in particular that any limitation to that right, offline and online, is in accordance with the criteria for permissible restrictions under international human rights law.
2020	55k	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (k) To ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, lawyers, journalists, environmentalists and dual and foreign nationals, are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrests, deprivation of liberty or other arbitrary sanctions; release all those detained in connection with their work; and extend the policy for the temporary release of prisoners in the context of COVID-19 to those individuals, as well as other detainees who pose no threat to public safety.
2020	55l	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (l) To eliminate in legislation and in practice all forms of discrimination and

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
			other violations against women and girls, in accordance with international standards; take all steps necessary to advance their equal participation in public life; ensure that the rights of women human rights defenders are protected; and ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
2020	55m	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (m) To protect the rights of all persons belonging to ethnic and religious minorities; address all forms of discrimination against them; and immediately and unconditionally release all those imprisoned for exercising their right to freedom of religion or belief.
2020	55n	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (n) To implement the recommendations accepted or partially accepted during the third cycle of the universal periodic review on the Islamic Republic of Iran.
2020	55o	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (o) To continue to engage with the Special Rapporteur, including by permitting the mandate holder to conduct a country mission to the Islamic Republic of Iran.
2020	55p	A/75/213	The Special Rapporteur urges the Government, judiciary, parliament and security forces: (p) To take all measures necessary to mitigate the effects of sanctions, meet the Government's obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including on the protection of vulnerable groups, and establish transparent financial mechanisms to ensure that trade in medicines and other essential humanitarian items continues.
2020	56	A/75/213	56. The Special Rapporteur urges States that have imposed sanctions on the Islamic Republic of Iran to ensure that measures such as humanitarian exemptions are given broad and practical effect and are promptly and effectively implemented to minimize the adverse consequences of sanctions on human rights in the Islamic Republic of Iran, especially during the COVID-19 pandemic.
2021	63a	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (a) Introduce an immediate moratorium on the death penalty, prohibit the execution of child offenders in all circumstances and commute their sentences.
2021	63b	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (b) Repeal laws authorizing torture and ill-treatment as a form of punishment, establish mechanisms for investigating torture claims and deaths in detention consistent with international standards, and ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2021	63c	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (c) Ensure that all persons accused of any crime have access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process, including during the initial investigation and interrogation stage, and are provided with legal aid.
2021	63d	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (d) Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, lawyers, journalists and dual and foreign nationals, and their families, are not threatened with or subjected to intimidation, arbitrary arrest, deprivation of liberty or life or other arbitrary sanctions; release all those arbitrarily detained; and extend the COVID-19 policy for the temporary release of prisoners to those individuals and other detainees posing no threat to public safety.
2021	63e	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (e) Conduct an independent, impartial and transparent inquiry consistent with international standards concerning the use of excessive and lethal force by security forces during the November 2019 protests and hold accountable all perpetrators of human rights violations during those protests.
2021	63f	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (f) Ensure that all individuals arrested for the exercise of their rights to freedom of opinion, expression, association and peaceful assembly are released and

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
			that the detaining authorities promptly report the whereabouts and situation of detainees to their families.
2021	63g	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (g) Ensure that the rights to freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association are respected in law and in practice, and that any limitation to these rights is in accordance with the criteria for permissible restrictions under international law.
2021	63h	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (h) Recognize independent trade unions and ratify all fundamental International Labour Organization conventions.
2021	63i	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (i) Protect the rights of all persons belonging to ethnic, religious and sexual minorities, eliminate all forms of discrimination against them and release all those imprisoned for exercising their right to freedom of religion or belief, for exercising their culture or for using their language.
2021	63j	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (j) Take all measures necessary to mitigate the effects of sanctions, meet the Government's economic and social rights obligations, including regarding the protection of vulnerable groups, and establish transparent financial mechanisms to ensure that trade in medicine and other essential humanitarian items continues.
2021	63k	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (k) Make substantial investments in all prisons to reduce overcrowding, improve hygiene and ensure that prisoners receive prompt access to medical treatment, especially during the COVID-19 pandemic.
2021	63l	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (l) Continue to engage with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, including by permitting him to conduct country missions in the Islamic Republic of Iran.
2021	64	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur urges States imposing sanctions on the Islamic Republic of Iran to ensure that measures such as humanitarian exemptions are given broad and practical effect and are promptly and effectively implemented to minimize the adverse consequences of sanctions on human rights, especially during the COVID-19 pandemic.
2021	65a	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (a) Ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women without reservations and ensure that legislation and policies are consistent with its obligations.
2021	65b	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (b) End discrimination against women and girls within all aspects of family law.
2021	65c	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (c) Implement measures to end child marriage, including by increasing the minimum age of marriage to 18 years.
2021	65d	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (d) Ensure gender equality within the criminal justice system, including by increasing the age of criminal responsibility for men and women to 18 years.
2021	65e	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (e) Repeal legislation that mitigates, or exonerates perpetrators of, violence against women and girls, including for so-called honour killings and criminal acts within marriage, and ensure accountability for perpetrators.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2021	65f	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (f) Introduce effective legislation and policies to help prevent violence against women and girls and hold perpetrators accountable.
2021	65g	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (g) Increase support services for victims of violence, including by providing more shelters and financial assistance, and provide necessary training to the police, judiciary and social workers.
2021	65h	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (h) Repeal all laws and regulations that impose mandatory dress codes.
2021	65i	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (i) Amend the Constitution and legislation to expressly state that all political and judicial positions are open to women and men, and introduce legislation and policies to promote increased participation of women in public affairs.
2021	65j	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (j) End gender discrimination in employment and introduce effective legislation and mechanisms to combat workplace discrimination.
2021	65k	A/HRC/46/50	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and/or Parliament: (k) Remove all obstacles that prevent the full enjoyment of women to the right to culture.
2021	70a	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (a) Impose an immediate moratorium on executions and commute all death sentences.
2021	70b	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (b) Urgently amend legislation to prohibit the execution of persons who committed a crime while below the age of 18 years and urgently amend legislation to commute all death sentences for child offenders on death row.
2021	70c	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (c) Abolish the death penalty for offences that do not amount to the “most serious crimes” within international human rights law.
2021	70d	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (d) Make fundamental reforms to the criminal justice system through the replacement of the diya system with State-administered custodial sentences for convicted defendants fully in accordance with international human rights law.
2021	70e	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (e) Immediately end mandatory death sentences and secret and public executions, and remove stoning as a punishment from the Islamic Penal Code.
2021	70f	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (f) Ensure that legislation provides a clear definition for all criminal offences that are punishable by death.
2021	70g	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (g) Repeal all laws that exonerate “honour killings” or encourage extrajudicial killings.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2021	70h	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (h) Publish comprehensive statistics regarding the number of death sentences implemented annually, disaggregated by ethnicity, religion, gender, age and criminal charge.
2021	70i	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (i) Withdraw the general reservation to the Convention on the Rights of the Child.
2021	70j	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (j) Ensure that all persons accused of any crime have access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process and are provided with legal aid as needed.
2021	70k	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (k) Repeal laws authorizing the use of torture and ill-treatment as a form of punishment; establish mechanisms for investigating claims of torture and deaths in detention consistent with international standards; end the use of torture-induced confessions as the basis for convictions and death sentences; and ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2021	70l	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran immediately abolish by legislation the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (l) Ensure that everyone sentenced to death has the right to seek pardon or commutation of sentences from the State.
2021	71a	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (a) Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, lawyers, journalists and dual and foreign nationals, as well as their families, are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrest, deprivation of liberty or life or other arbitrary sanctions; release all those detained in connection with their work; and extend the policy for the temporary release of prisoners in the context of COVID-19 to those individuals, as well as other detainees who pose no threat to public safety.
2021	71b	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (b) Conduct an independent, impartial and transparent inquiry consistent with international standards concerning the use of excessive and lethal force by security forces during the November 2019 protests, and hold accountable all perpetrators of human rights violations committed during those protests and ensure accountability for other events and incidents amounting to serious violations of human rights.
2021	71c	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (c) Ensure that all individuals arrested for the exercise of their rights to freedom of opinion and expression and to freedom of peaceful assembly and association are released and that the detaining authorities promptly report the whereabouts and situation of detainees to their families.
2021	71d	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (d) Ensure that the rights to freedom of opinion and expression and to freedom of peaceful assembly and association are respected in law and in practice, and in particular that any limitation to these rights is in accordance with the criteria for permissible restrictions under international law.
2021	71e	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (e) Recognize independent trade unions and ratify all fundamental International Labour Organization conventions.
2021	71f	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (f) Eliminate in legislation and in practice all forms of discrimination and other

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
			violations against women and girls; consistent with international standards, take all steps necessary to advance their equal participation in public life; ensure that the rights of women human rights defenders are protected; and ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
2021	71g	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (g) Protect the rights of all persons belonging to ethnic, religious and sexual minorities; eliminate all forms of discrimination against them and release all those imprisoned for exercising their right to freedom of religion or belief, for exercising their right to enjoy their own culture or for using their language.
2021	71h	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (h) Take all measures necessary to mitigate the effects of sanctions, meet the Government's economic and social rights obligations, including concerning the protection of vulnerable groups, and establish transparent financial mechanisms to ensure that trade in medicines and other essential humanitarian items continues.
2021	71i	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (i) Make substantial investments in all prisons to reduce overcrowding and improve hygiene, and ensure prisoners receive prompt access to medical treatment, especially during the COVID-19 pandemic.
2021	71j	A/76/160	The Special Rapporteur recommends that the authorities of the Islamic Republic of Iran: (j) Continue to engage with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, including by permitting the Special Rapporteur country visits to the Islamic Republic of Iran.
2021	72	A/76/160	The Special Rapporteur urges States imposing sanctions on the Islamic Republic of Iran to ensure that measures such as humanitarian exemptions are given broad and practical effect and are promptly and effectively implemented in order to minimize the adverse consequences of sanctions on human rights, especially during the COVID-19 pandemic.
2022	67a	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (a) Undertake fundamental reforms towards the establishment of a system of accountability in line with international law, including constitutional, legislative and administrative reforms to ensure separation of powers, political pluralism and democratic participation in governance and decision-making.
2022	67b	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (b) Undertake reforms to ensure the complete independence of the judiciary, including through the dissolution of the revolutionary courts, and reforms to ensure transparency in judicial appointments, which should be made based on merit and in the absence of any discriminatory conditions.
2022	67c	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (c) Conduct an independent, impartial and transparent inquiry consistent with international standards concerning the use of force by security forces during the November 2019 protests and hold accountable all perpetrators of human rights violations during those and other protests, including protests in Khuzestan and Isfahan in 2021.
2022	67d	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (d) Conduct a national and public inquiry into the handling of the COVID-19 pandemic.
2022	67e	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (e) Ensure the independence of bar associations in the Islamic Republic of Iran.
2022	68a	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur calls on the authorities to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (a) Impose an immediate moratorium on executions and commute all death sentences.
2022	68b	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur calls on the authorities to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (b) Urgently amend legislation to prohibit the execution of persons

Year	Para. N°	Source reference	Full recommendation
			who committed a crime while under the age of 18 years, and urgently amend legislation to commute all death sentences for child offenders on death row.
2022	68c	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur calls on the authorities to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (c) Abolish the death penalty for offences that do not amount to the most serious crimes under international human rights law.
2022	68d	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur calls on the authorities to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (d) Publish disaggregated data regarding the number of death sentences implemented annually.
2022	69a	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (a) Ensure that prisoners and detainees are protected from all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; ensure that confessions obtained through torture or ill-treatment are never admitted as evidence in court; establish mechanisms for investigating claims of torture and deaths in detention consistent with international standards; and ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2022	69b	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (b) Ensure the right to a fair trial to all individuals charged with a criminal offence, including access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process.
2022	69c	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (c) Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, lawyers, journalists and dual and foreign nationals, as well as their families, are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrest, deprivation of liberty or life or other arbitrary sanctions; release all those detained in connection with their work; and extend the policy for temporary release of prisoners in the context of COVID-19.
2022	69d	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (d) Release all individuals arrested for the exercise of their rights to freedom of opinion, expression, association and peaceful assembly, and promptly report the whereabouts and situation of detainees to their families.
2022	69e	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (e) Ensure in law and practice the rights to freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association; ensure that any limitation on these rights is in accordance with international law; and withdraw the bill on protecting the rights of users in cyberspace and organizing social media.
2022	69f	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (f) Repeal the law on young people and protection of the family and other laws that violate the rights of women and girls; take measures to advance women's equal participation in public life consistent with international law; and ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
2022	69g	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (g) Revise legislation to eliminate child marriage, and undertake comprehensive awareness-raising programmes on the harmful effects of early marriage on the girl child's rights to health, education and development.
2022	69h	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (h) Repeal all laws that exonerate "honour killings" and violence against women; adopt the bill on preserving the dignity of women and protecting them against violence, and adopt effective policies to end violence against women.
2022	69i	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (i) Ratify and implement all fundamental International Labour Organization conventions and recognize independent trade unions.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2022	69j	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (j) Undertake concrete actions to reduce existing economic inequalities and ensure an adequate standard of living, including access to basic services, without discrimination.
2022	69k	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (k) Take all measures necessary to mitigate the effects of sanctions.
2022	69l	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (l) Make substantial investments in all prisons to reduce overcrowding, improve hygiene, and ensure prompt access to medical treatment.
2022	69m	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (m) Continue to engage with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, including by permitting the Special Rapporteur to visit the country.
2022	70	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur urges States imposing sanctions on the Islamic Republic of Iran to ensure that measures such as humanitarian exemptions are given broad and practical effect and are promptly and effectively implemented to minimize the adverse consequences of sanctions on human rights, especially during the COVID-19 pandemic.
2022	71	A/HRC/49/75	The Special Rapporteur urges the international community to call for accountability with respect to long-standing emblematic events that have been met with persistent impunity, including the enforced disappearances and summary and arbitrary executions of 1988 and the November 2019 protests.
2022	73a	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities of the Islamic Republic of Iran to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (a) Impose an immediate moratorium on executions and commute all death sentences.
2022	73b	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities of the Islamic Republic of Iran to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (b) Urgently amend legislation to prohibit the execution of persons who committed a crime while under the age of 18 years and urgently amend legislation to commute all death sentences for child offenders on death row.
2022	73c	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities of the Islamic Republic of Iran to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (c) Impose a moratorium on all drug-related executions.
2022	73d	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities of the Islamic Republic of Iran to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (d) Amend legislation to allow judges discretionary powers to consider extenuating circumstances or choose the imposition of more lenient punishments in individual cases.
2022	73e	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities of the Islamic Republic of Iran to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences. Pending abolition, he recommends that the authorities: (e) Publish disaggregated data regarding the number of death sentences implemented annually.
2022	74a	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (a) Undertake fundamental reforms towards the establishment of a system of accountability in line with international law, including constitutional, legislative and administrative reforms, to ensure the separation of powers, political pluralism and democratic participation in governance and decision-making.
2022	74b	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (b) Undertake reforms to ensure the independence of the judiciary, including through the dissolution of the revolutionary courts, and reforms to ensure transparency in judicial appointments.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2022	74c	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (c) Ensure the independence of bar associations in the Islamic Republic of Iran.
2022	74d	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (d) Conduct an independent, impartial and transparent inquiry consistent with international standards concerning the use of force by security forces during the November 2019 protests and hold accountable all perpetrators of human rights violations in the context of these and other protests in 2021 and 2022.
2022	74e	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (e) Ensure that legislation, policies, practices and training concerning the use of lethal force by law enforcement and border officials are compliant with international standards, including the Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
2022	74f	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (f) Conduct an independent and transparent investigation concerning the shooting down of Ukraine Airlines flight PS752 and hold all perpetrators accountable.
2022	74g	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (g) Ratify the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction.
2022	74h	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (h) Thoroughly review safety and quality standards in the construction industry and conduct an independent and transparent inquiry into the collapse of the building in Abadan, holding those responsible accountable.
2022	74i	A/77/181	The Special Rapporteur calls on the authorities to: (i) Conduct a national and public inquiry into the handling of the COVID-19 pandemic.
2022	75a	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (a) Ensure that detainees are protected from all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, ensure that confessions obtained through torture or ill-treatment are never admitted as evidence in court, establish mechanisms for investigating claims of torture and deaths in detention that are consistent with international standards and ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2022	75b	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (b) Ensure the right to a fair trial to anyone charged with a criminal offence, including access to a lawyer of his or her choosing during all stages of the judicial process.
2022	75c	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (c) Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, lawyers, journalists and dual and foreign nationals, and their families, are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrest, deprivation of liberty or life or other arbitrary sanctions, release all those detained in connection with their work and extend the policy for temporary release of prisoners.
2022	75d	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (d) Release all individuals arrested for the exercise of their rights to freedom of opinion, expression, association and peaceful assembly and promptly report the whereabouts and situation of detainees to their families.
2022	75e	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (e) Ensure in law and practice the rights to freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, ensure that any limitation on these rights is in accordance with international law and withdraw the bill on protecting the rights of users in cyberspace and organizing social media.
2022	75f	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (f) Repeal the law on “youthful population” and other laws that violate the rights of women and girls, take measures to advance the equal participation of women in public life

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
			consistent with international law and ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
2022	75g	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (g) Revise legislation to eliminate child marriage and undertake comprehensive awareness-raising programmes on the harmful effects of early marriage on the girl child's rights to health, education and development.
2022	75h	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (h) Repeal all laws that exonerate "honour killings" and violence against women and adopt effective laws and policies to end violence against women.
2022	75i	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (i) Ratify and implement all fundamental International Labour Organization conventions and recognize independent trade unions;
2022	75j	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (j) Undertake concrete actions to reduce existing economic inequalities and ensure an adequate standard of living, including access to basic services, without discrimination.
2022	75k	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (k) Take all measures necessary to mitigate the effects of sanctions.
2022	75l	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (l) Make substantial investments in all prisons to reduce overcrowding, improve hygiene, and ensure prompt access to medical treatment.
2022	75m	A/77/181	The Special Rapporteur recommends that the Islamic Republic of Iran: (m) Continue to engage with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, including by permitting the Special Rapporteur to visit the country.
2022	76	A/77/181	The Special Rapporteur urges the international community to prioritize human rights issues and the implementation of international human rights obligations in all negotiations and agreements with the Islamic Republic of Iran.
2022	77	A/77/181	The Special Rapporteur urges States imposing sanctions on the Islamic Republic of Iran to ensure that measures such as humanitarian exemptions are given broad and practical effect and are promptly and effectively implemented to minimize the adverse consequences of sanctions on human rights, especially during the COVID-19 pandemic.
2022	78	A/77/181	The Special Rapporteur urges the international community to call for accountability with respect to long-standing emblematic events that have been met with persistent impunity, including the enforced disappearances and summary and arbitrary executions of 1988 and the protests of November 2019.
2023	76a	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and the parliament as appropriate: (a) Accept full responsibility for the death in custody of Jina Mahsa Amini and take immediate appropriate remedial actions; conduct an independent, impartial, thorough, effective, credible and transparent investigation into her death and ensure that all perpetrators responsible are held accountable.
2023	76b	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and the parliament as appropriate: (b) Ensure that lethal force is used only when strictly unavoidable to protect life, in accordance with principle 9 of the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and that everyone is allowed to participate in lawful and peaceful assemblies, in accordance with article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights;
2023	76c	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and the parliament as appropriate: (c) Immediately release all those arrested, detained and sentenced and, in particular, those sentenced to death, since 16 September 2022, for the peaceful exercise of their rights to freedom of opinion, expression, assembly and association.

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2023	76d	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and the parliament as appropriate: (d) Immediately end all forms of violence, torture and ill-treatment of protesters, including sexual violence and harassment of girls and women, issue urgent instructions to all law enforcement and prison authorities in this respect and ensure that all perpetrators responsible for violence, torture and ill-treatment, including sexual violence and harassment of girls and women, are held accountable.
2023	76e	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur recommends that the Government, the judiciary and the parliament as appropriate: (e) Ensure that all persons accused of any crime have access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process, including during the initial investigation and interrogation stage, and are provided with legal aid as needed; ensure the right to a fair trial, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights; ensure that prisoners and detainees are protected from all forms of torture and ill-treatment and that confessions obtained through torture or ill-treatment are never accepted as evidence; and ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2023	77a	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (a) Immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences and, pending abolition of the death penalty, impose an immediate moratorium on executions, including executions for drug offenders, and commute all death sentences.
2023	77b	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (b) Amend the Constitution, repeal existing gender-discriminatory laws, including regulations that impose mandatory dress codes, and abolish all regulations and procedures whereby women's dress or behaviour in public or private life are monitored or controlled by State agencies, and introduce laws and policies to ensure complete equality for women and girls in public affairs, including in employment and in personal and family laws, and introduce effective legislation and administrative policies to end violence against women and girls, including by repealing legislation that mitigates, or exonerates perpetrators of, gender-based violence.
2023	77c	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (c) Ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women without reservations and ensure that domestic laws and practices are in full compliance with this Convention and with other international obligations.
2023	77d	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (d) Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, lawyers, journalists, and foreign and dual nationals and their families are not threatened with or subjected to harassment, violence, arbitrary arrest, deprivation of liberty or life or other arbitrary sanctions and immediately release all those arbitrarily detained or arrested.
2023	77e	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (e) Protect the rights of all persons belonging to ethnic, religious and sexual minorities; eliminate all forms of discrimination against them in law and in practice and release all those imprisoned for exercising their right to freedom of religion or belief, to enjoy their own culture or to use their own language.
2023	77f	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (f) Immediately release all foreign and dual nationals arbitrarily detained.
2023	77g	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (g) Take all measures necessary to mitigate the effects of sanctions, meet the Government's obligations concerning economic and social rights, including those related to the protection of vulnerable groups, and establish transparent financial mechanisms to ensure that trade in medicines and other essential humanitarian items continues.
2023	77h	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur also recommends that the Iranian authorities: (h) Restore full engagement and cooperation with the Special Rapporteur and fully cooperate with

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
			the international fact-finding mission, including by allowing the Special Rapporteur and the fact-finding mission to conduct visits to the country.
2023	78a	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur urges the international community to continue to prioritize human rights issues, including by: (a) Supporting accountability efforts with respect to human rights violations and possible crimes under international criminal law committed since the start of the protests in September 2022, as well as calling for accountability with respect to long-standing emblematic events that have been met with persistent impunity, including the enforced disappearances and summary and arbitrary executions of 1988 and the protests of November 2019.
2023	78b	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur urges the international community to continue to prioritize human rights issues, including by: (b) Fully engaging with the Iranian authorities within United Nations mechanisms, in particular the Human Rights Council, and in bilateral and multilateral arrangements.
2023	78c	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur urges the international community to continue to prioritize human rights issues, including by: (c) Continuing to apply targeted sanctions for organizations and individuals that carry out serious violations of human rights and to make full use of the principle of universal jurisdiction to ensure accountability for perpetrators of human rights violations and crimes under international law.
2023	78d	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur urges the international community to continue to prioritize human rights issues, including by: (d) Supporting Iranian people by further enhancing provisions for access to the Internet.
2023	79	A/HRC/52/67	The Special Rapporteur urges States imposing sanctions on the Islamic Republic of Iran to ensure that measures such as humanitarian exemptions are given broad and practical effect and are promptly and effectively implemented to minimize the adverse consequences of sanctions on human rights.
2023	86a	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (a) Accept full responsibility for the death in police custody of Jina Mahsa Amini and take immediate appropriate remedial actions; conduct an independent, impartial, thorough, effective, credible and transparent investigation into her death; and ensure that all perpetrators responsible are held accountable.
2023	86b	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (b) Undertake prompt, independent and impartial investigations into the killings of protesters, as well as into acts of violence, including torture, enforced disappearances and arrests, that have taken place in the context of the nationwide protests since 16 September 2022; immediately end all forms of violence, arbitrary arrests and detentions of protesters; and identify and apprehend all those suspected of criminal and violent acts against protestors and ensure that all perpetrators responsible are held accountable.
2023	86c	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (c) Immediately end all forms of violence, including sexual violence and harassment of girls and women protesters, and prevent the poisoning of girls in schools; conduct immediate, independent and impartial investigations into acts of violence against, the targeting of and discrimination against girls and women; immediately take concrete steps to apprehend and punish all those involved in violent crimes against girls and women and the poisoning of girls in schools; eliminate in legislation and in practice all forms of discrimination and other violations against women and girls; and ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
2023	86d	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (d) Immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offences and, pending abolition of the death penalty, impose an immediate moratorium on executions, including on executions for drug offenders and those sentenced to death in the context of protests, and commute all death sentences;

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
2023	86e	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (e) Urgently amend legislation to prohibit the execution of persons who committed a crime while under the age of 18 years; and urgently amend legislation to commute all death sentences for child offenders on death row.
2023	86f	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (f) Repeal all laws and regulations that impose mandatory dress code and abolish all regulations and procedures whereby women's dress or behaviour in public or private life are monitored or controlled by state agencies; and immediately dismantle the morality police or any State machinery enforcing the hijab;
2023	86g	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (g) Ensure that everyone is allowed to participate in lawful and peaceful assemblies and to participate without discrimination in the public affairs, including having the right to take part in the conduct of public affairs, the right to vote and to be elected at genuine periodic elections and the right to have access to public services, in accordance with articles 21 and 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
2023	86h	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (h) Ensure that all persons accused of any crime have the right to a fair trial and due process, fully in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, including with access to a lawyer of their choosing during all stages of the judicial process; and end the use of torture- induced confessions as the basis for convictions and death sentences.
2023	86i	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (i) Ensure that human rights defenders, including women human rights defenders, and human rights lawyers and journalists are not threatened with or subjected to intimidation, harassment, arbitrary arrests, deprivation of liberty or other arbitrary sanctions, and release all those detained in connection with their work.
2023	86j	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (j) Immediately release all dual and foreign nationals arbitrarily detained in the Islamic Republic of Iran.
2023	86k	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (k) Ensure that all individuals within its territory and subject to its jurisdiction are treated equally before the law without distinction of any kind, such as on the basis of race, sex, language, religion, sexual orientation or political or other opinion.
2023	86l	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (l) Protect the rights of all persons belonging to ethnic, religious and sexual minorities; and eliminate all forms of discrimination against those persons and release all those imprisoned for exercising their right to freedom of religion or belief, for exercising their culture or for the use of their language.
2023	86m	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (m) Take all measures necessary to mitigate the effects of sanctions; meet the Government's economic and social rights obligations, including on the protection of vulnerable groups; and establish transparent financial mechanisms to ensure that trade in medicines and other essential humanitarian items continues.
2023	86n	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the Supreme Leader, the Government, the judiciary and Parliament, as appropriate: (n) Restore full cooperation and engagement with the mandate holder of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, including by permitting him to conduct

<i>Year</i>	<i>Para. N°</i>	<i>Source reference</i>	<i>Full recommendation</i>
			missions to the country; and cooperate fully with the independent international fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran.
2023	87a	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the international community: (a) Continue to apply targeted sanctions on organizations and individuals that carry out serious violations of human rights and make full use of the principle of universal jurisdiction to ensure accountability for perpetrators of human rights violations and crimes under international law.
2023	87b	A/78/326	The Special Rapporteur recommends that the international community: (b) Support Iranian people by further enhancing provisions for access to the Internet.
2023	88	A/78/326	The Special Rapporteur urges the international community to call for accountability with respect to long-standing emblematic events that have been met with persistent impunity, including the enforced disappearances and summary and arbitrary executions of 1981 and 1988 and the protests of November 2019.
2023	89	A/78/326	The Special Rapporteur urges States imposing sanctions on the Islamic Republic of Iran to ensure that measures such as humanitarian exemptions are given broad and practical effect and are promptly and effectively implemented to minimize the adverse consequences of sanctions on human rights.
